

Análisis de Coyuntura

REVISTA MENSUAL

ABRIL DE 2005

AÑO IV • N° 58

1 PESO

Situación Mundial

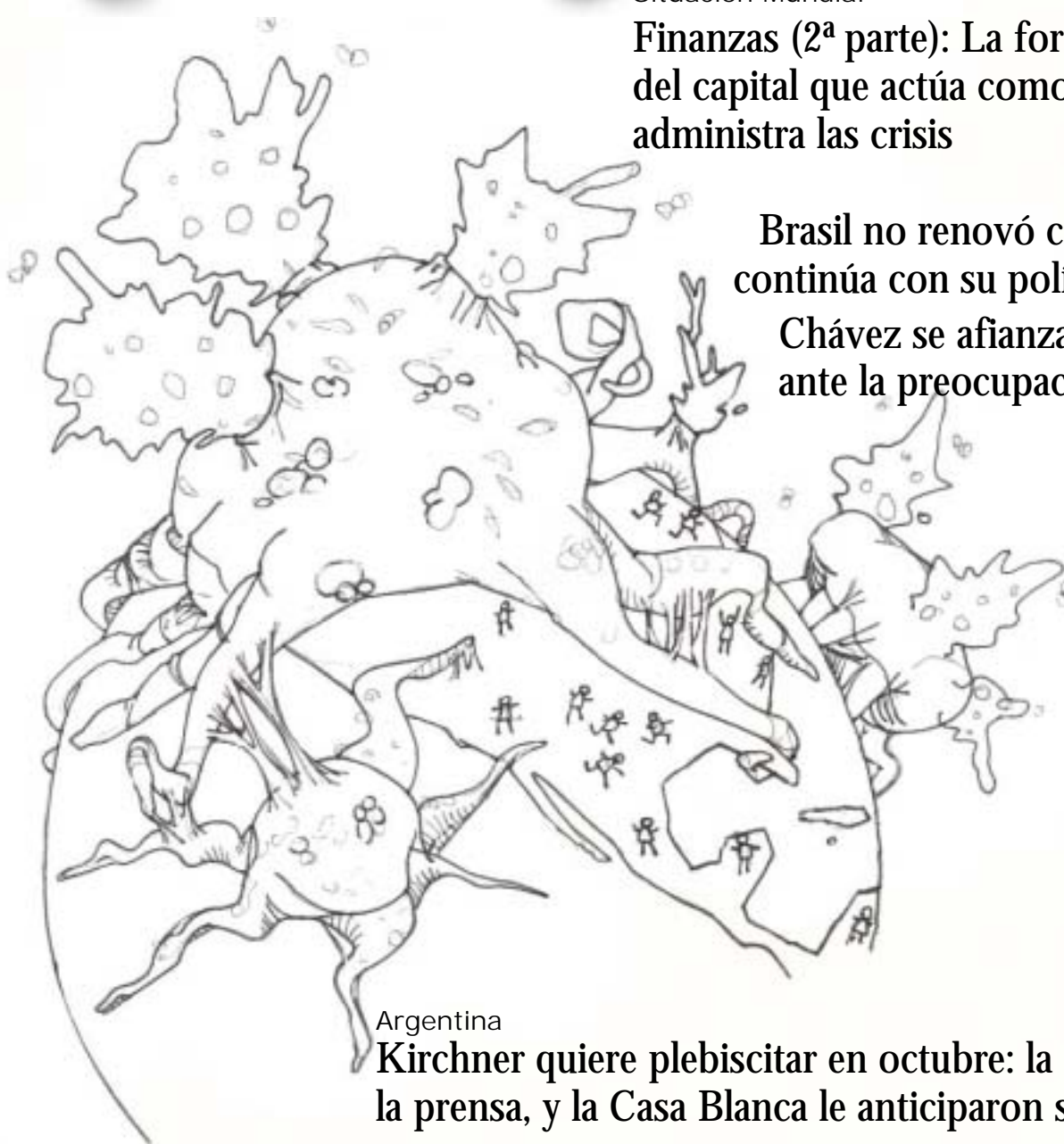
Finanzas (2ª parte): La forma de gestión del capital que actúa como referencia y administra las crisis

América Latina

**Brasil no renovó con el FMI pero continúa con su política económica
Chávez se afianza regionalmente ante la preocupación de EE.UU.**

Argentina

**Kirchner quiere plebiscitar en octubre: la Iglesia, la prensa, y la Casa Blanca le anticiparon su voto.
El país serio: entre el boicot y las reglas claras**



Situación Mundial

3 Pelea por las ganancias

Reforma jubilatoria en EE.UU.: "Plan de Ahorro" para fines indeterminados aunque determinables
Historia de las finanzas: $2+2=5$

7 Coyuntura política

De las enseñanzas de la rama, el capital encuentra su forma de gestión...

América Latina

10 Pelea por las ganancias

El motor chino parece enfriarse y aparecen nubarrones en el MERCOSUR
Brasil afianza su política económica sin renovación con el FMI

12 Coyuntura política

Cumbre en Venezuela: apoyo clave a Chávez.
Se van tensando las relaciones entre EE.UU. y la región

13 Conflicto Social

Bolivia: La guerra del gas abrió una nueva batalla

Argentina

15 Pelea por las ganancias

El país serio: entre el embargo y la austeridad fiscal.
La batalla por los precios: la política del boicot.
La batalla por los salarios: el "antipopulismo" y antiestatismo de Lavagna.

18 Coyuntura Política

Preparando el terreno electoral
De cristianos y demonios
La SIP y un informe "precisamente incorrecto".
Baratitos los radars...

21 Conflicto social

Análisis de Coyuntura

Revista Mensual
Abril de 2005
Año IV • Nº 58

Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñoz.

Fuentes consultadas: EE.UU.: *Wall Street Journal* (WSJ); *New York Times* (NYT); *Washington Post* (WP) – Francia: *Le Figaro* (LF); *Le Monde* (LM) – Gran Bretaña: *The Economist* (TE); *BBC News* (BBC) – España: *El País* (EP); suplemento Nueva Economía de *El Mundo* (NEEL) – México: *La Jornada de México* (LJdM) – Venezuela: *El Universal* (EUn) – Colombia: *El Tiempo* (Et) – Bolivia: *Los Tiempos de Cochabamba* (LTC) – Perú: *La República* (LR) – Brasil: *Folha de Sao Paulo* (FSP); *O estado do Sao Paulo* (OSP); *Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo* (FDT) – Argentina: *Clarín* (C); *La Nación* (LN)

Para contactarnos: informecon@yahoo.com.ar

Números anteriores: www.geocities.com/informecon

En este número

Presentamos en Situación Mundial la continuación del análisis de la rama financiera que comenzamos en el número anterior. Partiendo del caso de la actual iniciativa del gobierno de Bush para reformar el sistema previsional, se relata someramente su origen y, en parte desde allí, los cómo y los porqué de esa reforma que, en pocas palabras, busca hacer de los ahorros jubilatorios una fuente más jugosa de beneficios para esta rama. Rama en la que se materializa la capacidad del sistema de convertirlo todo en mercancía. Un ejemplo extremo son los fondos vinculados a la reducción de emisiones de gases invernadero: incluso las posibilidades futuras de vida –en tanto dependen de la situación del medio ambiente– se traducen en papeles que se compran y venden, que cotizan según oferta y demanda. Más acá de este ejemplo, veremos también el devenir histórico de la rama –que nos vuelve a mostrar la necesidad que el capital tiene de quebrar las fronteras nacionales y los conflictos políticos que esto implica–, el de sus subsectores, y la influencia que el tipo de gestión que se desarrolló en su seno ha tenido sobre las demás ramas.

En América Latina, el proceso de integración alternativo al que quisiera hegemonizar EE.UU. tuvo ciertamente una muestra de fuerza en la cumbre de los presidentes de Colombia, Brasil, Venezuela y España: la propia participación del presidente colombiano, que meses atrás abriera un serio conflicto con su vecino, mostró palmariamente el fracaso de EE.UU. en aislar a Venezuela. Incluso el modélico –para EE.UU.– presidente chileno se declaró contrario a ese intento de aislamiento. Y, además, se progresa en la integración de las infraestructuras de la región, en este caso a partir de la energía. Otras novedades tienen que ver con la decisión de Brasil de no renovar el acuerdo que lo comprometía con el FMI, y con la aún irresuelta situación política y social en Bolivia: la “renuncia” de Mesa lejos estuvo de resolver alguno de los problemas de esa situación. Sigue más que vigente la movilización social en búsqueda de una vida más digna.

Y también aquí, en nuestro país, la normalidad que prometía la salida del default parece empecinarse en seguir ausente: el propio default fue congelado por decisión de la justicia de EE.UU., un despunte inflacionario disparó un llamado del gobierno a un boicot contra Shell, una disputa intestina por la cuestión salarial, y, además, el FMI vuelve a la carga pidiendo atender a los bonistas que no entraron al canje, y exigiendo las clásicas reformas estructurales. Al mismo tiempo, se desatan conflictos entre el gobierno y, separadamente, la iglesia y los grandes medios masivos de comunicación, mientras el propio Kirchner llama a plebiscitar su gestión en las elecciones legislativas del próximo octubre con el principal aparato político del país –el PJ bonaerense– en una dura disputa interna. Los enfrentamientos no dan respiro, y si es en ellos que va construyéndose fuerza, cabe suponer que en el confrontativo estilo K juega no sólo un factor de personalidad, sino una necesidad política.

Veamos entonces...

Situación Mundial

Como vimos en el análisis anterior, la importancia de las finanzas en la actualidad queda evidenciada por su injerencia cada vez mayor en todos los aspectos de la reproducción de la vida material de la sociedad. Observamos que tanto los momentos de auge como los de declinación del ciclo económico se manifiestan o cristalizan en la actividad financiera en sentido amplio. La moneda y toda la gama de instrumentos financieros que amplían la base monetaria, esenciales por su doble rol de reserva de valor y de medio de pago, constituyen las vías de transmisión a través de las cuales se desarrolla el proceso de concentración y centralización del capital. Este proceso supone una reasignación interna del capital social global, según el cual diferentes fracciones de la burguesía se subordinan y pasan a engrosar la masa de capital de un grupo económico de mayor envergadura o desaparecen como tales, arrastrando con ellas a las de la clase obrera con la cual conforman una parte alícuota de la unidad

contradictoria del capital. Esta particularidad, que catapultada a la rama a una posición privilegiada para usufructuar las tendencias esenciales del sistema capitalista, convive con otra característica general: el incremento de la composición orgánica del capital. La permanente revolución en los procesos de trabajo encuentra en las actividades de servicios financieros un conspicuo usuario de las innovaciones tecnológicas. Obviamente, el creciente carácter inmaterial de las formas dinerarias estimula esta productiva asociación entre la rama tecnológica y la financiera, a tal punto que se desdibujan los límites de lo que puede considerarse dentro de ésta última. Por ende, las formas concretas que presenta actualmente la rama son, entonces, determinadas por el desarrollo histórico del sistema capitalista y de cada espacio de acumulación. Del análisis de las mismas intentaremos establecer la esencia que las une, es decir, los principios y características comunes.

Pelea por las ganancias

Reforma jubilatoria en EE.UU.: "Plan de Ahorro" para fines indeterminados aunque determinables

El sector de las finanzas, que como veremos incluye en su seno distintas actividades, presenta todas las características propias del sistema capitalista, que podemos observarlas en su génesis, desarrollo y dinámica permanente. En él podemos constatar la intrínseca unidad del proceso de concentración y centralización del capital y de la incorporación de la tecnología en el proceso de trabajo. Tratándose de un proceso habitual de agregación cuantitativa permanente, resulta difícil establecer los saltos cualitativos en periodos de tiempo relativamente cortos, por lo que más adelante describiremos los principales sucesos actuales en la conformación de las distintas ramas, a modo de ejemplos. Sin embargo, existen momentos peculiares en el desarrollo del modo de acumulación global que representan verdaderos saltos cualitativos. En rigor, la posibilidad de establecerlos se desprende de la relación entre la profundidad del momento del proceso y la brutalidad con la cual la burguesía manifiesta la necesidad de una resolución –en favor de cada una de las fracciones enfrentadas– de ese intervalo del proceso de acumulación. El mayor o menor descaro en la prosecución de una resolución, frecuentemente expresado en el plano político, se revela por el grado de sofisticación de nuestro análisis, como veremos rayano en lo aparental. Así, una simple observación de las iniciativas actuales nos revela un posible momento de esas características. Las intenciones de re-

formar el sistema de seguridad social por parte de la administración Bush, en EE.UU., indudablemente pueden significar una verdadera renovación de la fisonomía del sector. Tanto porque se desarrolla en el espacio de acumulación de mayor peso en la actualidad –según vimos en el Análisis anterior– como por la desembosada forma en que la iniciativa se impulsa y las repercusiones que acarreo en el plano político. En la búsqueda del codiciado salto cualitativo de cualquier análisis, observaremos dichas iniciativas e intentaremos determinar qué significan.

Reforma del sistema de seguridad social en EE.UU.

"El resto del mundo podrá estar preocupado por el enorme déficit presupuestario de EE.UU., pero si George W. Bush está preocupado, lo disimula muy bien. Junto con la reforma impositiva, la reforma de la seguridad social -el sistema jubilatorio estatal- es el objetivo principal en materia económica para Bush en el segundo período. (...) Cualquier reforma deberá llevar a la creación de cuentas individuales en las que los estadounidenses puedan colocar sus ahorros para la jubilación, (...) la mayoría de las propuestas se centran en permitir a los empleados derivar parte de los aportes que hacen automáticamente a través de descuentos en sus salarios, hacia cuentas privadas. Debido a que la seguridad social es un sistema solidario en el que los impuestos a las nóminas del personal (12,4% de los ingresos divididos en partes iguales entre el empleador y el empleado) financian las actuales jubilaciones, cualquier desvío de fondos crea una brecha en la contabilidad del estado" (TE 26/12/04). En esencia, el sistema de jubilaciones y pensiones significa una restricción al consumo presente para financiar

la reproducción futura. Para la burguesía, su tributación al sistema constituía una mera cuestión ideológica –un sistema solidario respaldado por la forma política de colaboración de clases– más que una restricción al consumo: su aporte era una insignificante parte alícuota de su consumo, en el caso de los aportes individuales de los empresarios para su propio retiro, o un costo agregado al del valor de la fuerza de trabajo, en el caso de los aportes sobre nómina por parte de cada capital individual. Por otra parte, para ella el consumo futuro estaba asegurado por la protección a la propiedad privada constitutiva del sistema capitalista, que aseguraba la reproducción física del conjunto familiar a partir de la plusvalía apropiada por cada capital individual. En muchos casos, la transmisión hereditaria de la propiedad no sólo conformaba la vía de transmisión de la reproducción futura, sino que determinó que sea aún más importante el impuesto a la herencia que los aportes directos al sistema jubilatorio.

La brutalidad de la crisis del '30, magnificada por la sensación de inseguridad que sus efectos económicos transmitían, fue el catalizador que posibilitó la creación del sistema previsional. Hasta ese momento, como vimos, sólo para la burguesía –y en una ínfima medida para ciertas capas medias y trabajadoras– existía cierta seguridad en la provisión para el consumo futuro. Por ende, la creación del sistema estuvo principalmente dirigido a la clase obrera y, en segundo lugar, a la pequeña burguesía y sectores medios. En distintos grados, para esas clases, la restricción al consumo presente significaba ciertos sacrificios, principalmente en los momentos de crisis. La creación del sistema supuso entonces –principalmente– un sacrificio inicial de los sectores en actividad de la clase obrera y la simultánea conformación, para los sectores ya retirados por su longevidad o su inutilidad –el grueso de la población sobrante para el capital en ese momento–, de un sistema ad-hoc que los protegía y mantenía. En el momento de su génesis, el sistema no tenía fondos suficientes para otorgar beneficios jubilatorios a la población calificada para recibirlos, por lo cuál se inauguró un mecanismo de endeudamiento en el sistema previsional que constituyó una expansión de la masa monetaria. Aunque este mecanismo pasó desapercibido para el público en general, no fue eludida la obligación para el conjunto de la sociedad de proveer a su cobertura.

La evolución de la economía política determinó que, como una excepción, esa brecha se cerrase con la Segunda Guerra Mundial y el auge que le sucedió. Sin embargo, el mecanismo quedó instalado de una vez y para siempre en el manual de los gestores de política económica, ya que constituía la forma neces-

ria en que se manifestaba la brecha creciente entre producción y consumo: el consumo a crédito, disfraz del disfrute del valor y el plusvalor en el presente a cuenta de la futura realización del valor contenido en las mercancías.

La expansión económica posterior a 1945, sobre la base de una proverbial destrucción de fuerzas productivas, nutrió al sistema de una fortaleza financiera al punto de llegar a excederlo. Las posibilidades de ahorro social en EE.UU.¹, desbordaron la capacidad de absorción combinada del sistema previsional y del mercado de consumo de bienes. Una masa de ahorro social que incluía a vastos sectores obreros² buscó un cauce para evitar su depreciación inflacionaria. El volumen global en que la clase obrera en su conjunto participaba en la conformación de ese ahorro total palidecía con su tamaño per cápita. El sistema financiero buscó entonces absorber ese volumen de capital potencial³, necesario para incrementar la escala de cualquier rama de la producción, usufructuando la posición privilegiada a la que el desarrollo histórico que veremos más adelante había catapultado. La medida del éxito se vio reflejada en que aún el ahorrista más insignificante pudo sentirse parte de una socie-

¹ La tasa de ahorro sobre el total de los ingresos personales en EE.UU. entre 1960 (primer año de medición) y 1995, estuvo en un promedio de 6,8%. Nunca estuvo por debajo del 6% hasta 1985, año a partir del cuál nunca superaría el 4% en cada año (*Gale Encyclopedia of US Economic History*). En octubre de 2004 se alcanzó la marca más baja (0,2%), sólo superada por los valores negativos de octubre de 2001, mes posterior al ataque a las torres gemelas. Ello a pesar que en dicho mes (10/2004) los ingresos personales totales se incrementaron en promedio un 0,6% (WSJ 2/12/04). En ese mismo momento, en los doce países de la zona del euro la tasa de ahorro alcanzaba un 10,5% y la de Japón un 5% (WSJ 13/12/04).

² El mayor fondo institucional es el llamado Calpers (California Public Employee Retirement System), que asciende a US\$ 177 billones. El mismo fue creado en 1932 y está formado por los aportes de 1,4 millones de empleados y jubilados de la administración pública del Estado de California. Su comportamiento en los mercados financieros no se aleja del de cualquier empresa: condujo con éxito el esfuerzo por remover a Dick Grasso al frente de la NYSE –principal Bolsa de valores de New York (véase *Análisis* N° 40 de septiembre 2003 y 41 de octubre 2003)– e impulsó la ofensiva contra Michael Eisner, presidente de Disney (WSJ 1/12/04).

³ El sistema ya contempla formas mixtas, usufructuadas por el empresariado que administra los fondos de pensión de sus propios trabajadores. Aerolíneas, automotrices y siderúrgicas son los ejemplos permanentemente destacados por los medios en virtud de la constante falta de financiamiento de sus planes de pensiones, cuyos fondos se retienen en la esfera de la producción y/o financian suculentas retribuciones a sus ejecutivos.

dad⁴ que lo seducía simultáneamente con las bondades del consumo masivo y con la construcción ideológica necesaria para que una capa aún desprestigiada de la burguesía pudiese decidir sobre su futuro. Esta construcción no es otra que la utilizada en 1997 por José Piñera, el “apóstol chileno de la privatización de jubilaciones”, para convencer al entonces gobernador de Texas George W. Bush: “*La reforma de la seguridad social puede ser usada tanto para proveer una jubilación decente, como para crear un mundo de capitalistas trabajadores, una sociedad de propietarios*” (WSJ 3/3/05). En definitiva, como veremos, el desarrollo de las finanzas no es otra cosa que una permanente carrera dirigida por ciertas fracciones de la burguesía para reducir los componentes del gasto social –primordialmente la reproducción de población sobrante para el capital– que atentan contra la expansión de la envergadura del capital social dispuesto para su valorización, consecuencia de la permanente necesidad de expandir la escala productiva constitutiva del incremento permanente de la composición orgánica de capital.

Historia de las finanzas: 2+2=5

En la actualidad, el sistema financiero se encuentra altamente diversificado, con EE.UU. liderando la creación de instrumentos financieros. Éstos pretenden disfrazar en distinta medida lo que en esencia sigue constituyendo la ganancia de una parte del capital, aquél que precisa de intermediarios cada vez más especializados –por el avance de la división internacional del trabajo– para volcarse a la producción y así poder absorber una parte de la valorización. El último modelo de ellos nos indica la renovación permanente de los límites de lo potencialmente “negociable”: “*Natsource LLC anunciará hoy la creación de un fondo de US\$ 95 millones que reunirá contribuciones de seis compañías europeas, japonesas y canadienses. El fondo invertirá en proyectos en todo el mundo para frenar las emisiones de dióxido de carbono y otros gases con efecto invernadero, dando a los participantes en el fondo créditos que pueden usar para cumplir con los recortes de emisiones que les han asignado, en lugar de reducir la polución en sus propias instalaciones. El mayor de dichos fondos de inversión, operado por el Banco Mundial (BM), ha seguido creciendo rápidamente durante los últimos meses. El BM opera ocho fondos similares usados por 60 compañías y entidades gubernamentales con un total de US\$ 800 millones*” (WSJ 28/2/05)⁵. Esta diversificación de ins-

trumentos de la gestión financiera del capital es el efecto lógico de la transformación realizada a su vez en las mismas entidades gestoras. En efecto, las sucesivas reglamentaciones destinadas a flexibilizar el movimiento de capitales a escala mundial determinó una multiplicación de las organizaciones con capacidad de realizar las funciones propias del sector. No obstante las diferencias notables que pueden encontrarse en su interior, se pueden dividir, en general, en cuatro sectores principales:

1. Banca

En la actualidad, constituye el principal receptor de riqueza social acumulada. Aunque su participación en el volumen total de fondos del ahorro social viene declinando⁶, su predominio actual es indiscutido. Su posición emerge, en parte, del hecho de que se trata de la primera forma dedicada específicamente a funciones de pago, atesoramiento y crédito. Es heredera de la banca mercantil, que surge como consecuencia de la necesidad de conservar en un lugar seguro el metálico obtenido en las transacciones comerciales. Esto le otorgó una ventaja sobre el resto, pues su función en los albores del sistema capitalista la dotó de un rol imprescindible en cualquier proyecto de envergadura en la ampliación de la escala productiva y circulatoria. Durante la etapa del “*capitalismo de libre competencia*” detentaron la potestad de emitir el equivalente general de las mercancías: acuñaban moneda o emitían medios de pago representativos del metálico atesorado en el banco. Su predominio implicó para el sector una mayor preocupación política por su suerte, al conformar el núcleo del ahorro del espacio de acumulación. Por esta razón, durante el grueso de la historia del sector, fue el que mayores regulaciones enfrentó.

En la actualidad, la celosa defensa de esos espacios se constata en la diferente suerte que corren las fusiones bancarias. En Japón, luego de una puja con el Sumitomo Mitsui Financial Group, “*la oferta final del Mitsubishi Tokyo Financial Group, segundo mayor banco del país, por el cuarto, UFJ Holdings, por US\$ 29.100 millones, podría ser suficiente para ganar la aprobación en junio de los accionistas de UFJ. Esta adquisición crearía la mayor compañía financiera del mundo por activos, con US\$ 1,8 billones.*

de las centrales de energía. Entre 2008 y 2012, las 38 naciones industriales cubiertas por el protocolo deben reducir un 5,2% frente a los niveles de 1990. (...) Los sistemas de tope y negociación asignan a las compañías un límite de emisiones. El gobierno concede permisos o asignaciones para producir emisiones sólo hasta ese límite. Aquéllas que reduzcan las emisiones aún más de lo asignado generarán créditos con ese excedente para vender a las empresas con campañas de reducción insuficientes.” (WSJ 28/2/05)

⁶ Entre mediados del siglo XIX y principios del XX, la participación de la banca en el total de activos financieros pasó de 80% a 53%.

⁴ Entre 1952 y 1970, por ejemplo, el número de tenedores de acciones pasó de 6.490.000 a 30.850.000 (Porter Encyclopedia of American Economic History).

⁵ “*Aunque EE.UU. se ha retirado del Protocolo de Kyoto, los sistemas de tope y negociación establecidos para cumplir con el tratado se han desarrollado tomando como modelo dos programas de la Dirección para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU., para reducir las emisiones de dióxido de sulfuro y óxidos de nitrógeno*

Más fusiones se vislumbran en el horizonte, lo que ocasionaría que pronto Japón sea la sede de tres de las cuatro mayores firmas financieras del mundo. Los analistas dicen que las conversaciones entre Sumitomo y la segunda agencia de corredores de bolsa del país podría crear otro gigante con US\$ 1,4 billones en activos, cifra que igualaría a las actuales dos mayores compañías financieras del mundo, la japonesa Mizuho Financial Group y la estadounidense Citigroup” (WSJ 22/2).

Como vemos, en el interior de un espacio de acumulación, las fusiones entre entidades financieras – forma concreta del proceso de concentración y centralización del capital– son estimuladas por la comunidad empresarial. Y esto permite contar con el guiño aprobatorio de entidades regulatorias que sustentan su existir en la noción de “*defensa de la competencia*”.

Distinta es la historia cuando el proceso traspasa las barreras políticas. El intento del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) de adquirir el 85% de las acciones que no posee del banco italiano Banca Nazionale del Lavoro (BNL) es un cabal ejemplo. De concretarse, la suma de BBVA (segundo banco español) y BNL (sexto banco italiano) crearía un gigante de 50.000 millones de euros de capitalización en bolsa, la tercera banca de la zona euro y la séptima de Europa. La transacción total insumiría unos 6.500 millones de euros. Lo que está en juego es lo suficientemente importante para producir grietas en el propio gobierno: mientras el primer ministro Berlusconi proclama que la política oficial es “*mercado, mercado y más mercado*” y Doménico Siniscalco, el ministro de finanzas, anunció que no piensa intervenir y que el argumento de la propiedad italiana de los bancos es “*populista e indefendible*”, el ministro de trabajo, Roberto Maroni, afirmó que las operaciones de BBVA y ABN Amro “*son un intento de agresión sobre el sistema crediticio italiano*”, y el ministro de comunicaciones, Maurizio Gasparri, señaló que apoya la competencia, pero no la colonización (LF 24/3). Los choques en el gabinete fueron debidamente seguidos de presiones por parte del gobierno español y de la Comisión Europea, que anunció que no tolerará trabas políticas a la operación (LF 27/3). Resulta interesante señalar que los sindicatos italianos apoyan la compra del BNL por parte del grupo español, del mismo modo en que los sindicatos ingleses avalaron la compra del Abbey National por parte del Santander: es que la adquisición de una entidad local por parte de otra extranjera implica, normalmente, menos pérdidas de puestos de trabajo que si la compradora fuera otra entidad del país, en mejores condiciones para realizar ajustes vía fusión de oficinas y locales comerciales (ver *Análisis* N^o 57). La advertencia de la Comisión Europea va dirigida especialmente al Banco de Italia (el Banco Central italiano), cuyo gobernador, Antonio Fazio, es un

abierto defensor del control nacional del crédito. Fazio, busca impedir la operación, incitando a otras entidades locales (se habla del toscano Monte dei Paschi y del Popolare de Verona y Novara) a entrar en la competencia y animando a los accionistas del BNL a aglutinarse en torno al grupo constructor Caltagirone, que en julio de 2004 constituyó un bloque contrario al que dirige el BBVA con el propósito de hacerse con la mayoría accionaria del Lavoro (NE EM 27/3). Esto último revela que la postura de Fazio responde a la estrategia de al menos una fracción de la burguesía industrial italiana. Recordemos, de paso, que el gobierno de Berlusconi no goza ya del aval de la Confindustria, la corporación industrial italiana, que en el invierno último llegó incluso a apoyar las movilizaciones sindicales en contra de la política económica. El caso italiano ilustra los bloqueos políticos – también notorios en el caso de Francia y Alemania– a las fusiones transfronterizas en el sector bancario. La postura de estos últimos gobiernos, que provoca enfrentamientos con el ejecutivo de la UE, es la de repeler estas operaciones hasta la constitución de “*campeones nacionales*” en el sector bancario.

Abiertamente, la Comisión Europea declara su aval a la integración bancaria europea; la expresión legal de esta política son el conjunto de disposiciones que constituyen el Plan de Acción para los Servicios Financieros (FSAP), gradualmente incorporadas a las legislaciones nacionales. Lo que se persigue es – fundamentalmente– dotar a la UE de entidades capaces de resistir el acoso de los grandes bancos norteamericanos, lo que parece imposible de lograr por parte de bancos que operan en el estrecho marco de las economías nacionales⁷. Aunque por lo general la esfera política sólo puede retrasar el proceso, muchas veces es suficiente para que el capital intente hacerlo en otro ámbito.

2. Seguros

Históricamente surge con anterioridad a la expansión del modo de producción capitalista: durante la etapa mercantil, la azarosa suerte de los viajes transoceánicos derivó en la necesidad de establecer un servicio de cobertura ante las eventualidades. Los seguros marítimos se crearon con el fin de brindar seguridad a las inversiones⁸, que en su momento eran las de mayor volumen. Ya en el siglo XIX, los seguros contra incendios derivados del avance de la industrialización y el urbanismo contribuyeron al crecimiento del sec-

⁷ La única excepción en este sentido la constituye el multinacional HSBC, primer banco europeo con sede en Londres, pero cuyos beneficios se realizan en un 35% en Asia.

⁸ Las primeras empresas por acciones fueron las Compañías de Indias holandesas que realizaban expediciones intercontinentales.

tor hasta que los seguros de vida le imprimieron mayor velocidad al crecimiento. Estos últimos emergieron con fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, momento en que no existían formas que asegurasen la reproducción material de la familia del beneficiario con posterioridad a su desaparición física. En ese momento, aún la persona del capitalista se demostraba imprescindible para lograr sostener el proceso de acumulación para cada capital individual, o al menos de esta manera era percibido por los contemporáneos. El crecimiento del sector corrió en sintonía con la posibilidad de volcar sus inversiones en los mercados financieros.

3. Fondos mutuales y de pensión

Especialmente en EE.UU. los fondos de inversión sufrieron un espectacular crecimiento desde fines de la década del '60 hasta la actualidad. Como consecuencia de la desregulación financiera, una parte importante de los fondos destinados a pensiones, seguros de vida y de retiro, etc. se orientaron a este sector, que también cuenta con beneficios impositivos. La razón principal estribaba en que, como veremos, la desregulación financiera aún no había llegado a la banca. Originariamente, dichos fondos son una reformulación del mutualismo europeo que canalizaba el ahorro de las clases trabajadoras para fines determinados.

4. Entidades financieras no bancarias

Esta categoría es definida en mayor medida por la negativa. Son todas aquellas instituciones menores que no se incluyen en el resto. Principalmente, entre ellas podemos mencionar: Asociaciones de Ahorro y Crédito, Uniones de Crédito, Bancos Mutuales de Ahorro, Trust Personales, etc. En particular, cabe destacar un tipo de institución cuyo volumen la instala prácticamente en un rubro particular: las Compañías Hipotecarias. El desarrollo de estas instituciones –

exponencialmente mayor en EE.UU.– se desprende en mayor medida de que la actividad hipotecaria constituye un formidable captador de recursos: el ritmo y la intensidad de la actividad de construcción posibilita que se constituya simultáneamente en un sector particular (financiación hipotecaria) y en instrumentos particulares de cualquier institución crediticia. En EE.UU., dos poderosas empresas, Fannie Mae y Freddie Mac, detentan una posición de privilegio. Por esto mismo también son objeto de reforma para la agenda republicana. Bajo el pretexto de “*los escándalos contables de las dos compañías –de capitales privados aunque establecidas y auspiciadas por el congreso para promover la construcción de viviendas a través de la compra de hipotecas de bancos y otras instituciones– la administración Bush impulsa la legislación para crear un ente regulador más estricto que pueda liquidarlas si éstas no pueden pagar. Para desalentar la idea de los inversores de que el gobierno las rescatará si están en problemas. Este factor permitió a las compañías prestar a una tasa de interés apenas mayor que los bonos del tesoro*” (WSJ 17/1). Este sector fue el principal perjudicado por el alza de tasas de interés de referencia impulsado por el gobierno de Reagan, situación que les impidió obtener fondos a valores sustentables (ver en *Análisis* anterior la diferencia entre tasas activas y pasivas).

Participación sectorial sobre el total de activos financieros

Sector	1975	1992
Banca	37,4%	26,8%
Seguros	17,6%	16,6%
Fondos de pensiones	13,9%	21,1%
Fondos mutuales	2,0%	11,4%
Entidades no bancarias	18,8%	10,5%
Otros	10,3%	13,6%

Fuente: First Boston Corp., Federal Reserve Board.

Coyuntura política

De las enseñanzas de la rama, el capital encuentra su forma de gestión apropiada para continuar con la acumulación

La separación sectorial que describimos más arriba se vuelve difusa por la multiplicidad de inversiones de un mismo grupo económico y el entrecruzamiento de las inversiones –por lo general los cambios de manos de empresas están a la orden del día como cualquier rama de la producción y circulación capitalista. El sector es verdaderamente una perla para cualquier fracción del capital. El conglomerado norteamericano General Electric (GE) “*comenzó la división de finanzas globales con dos empleados y un ejecutivo hace poco más de 10*

años y se convirtió en uno de los tres negocios principales de GE, después de finanzas comerciales y energía. GE Consumer Finance provee créditos de todo tipo. En 2003, la filial contribuyó con U\$S 2.160 millones sobre el total de U\$S 15.000 millones en utilidades generadas por el grupo” (WSJ 25/8/04).

Los mayores grupos económicos a nivel mundial presentan características similares. Por supuesto, con lógicas diferencias en cuanto al peso relativo de cada una de las actividades donde el capital acumulado se localiza para su valorización –emergentes de diferencias geográficas, históricas, políticas y sociales, que cincelan las formas concretas que toma en cada espacio de acumulación. La unidad que conforman la su-

ma de los capitales particulares y el espacio políticamente determinado donde esas potencias se desarrollan se encuentra en permanente metamorfosis interna hasta que alcanza un punto de saturación que revela su carácter contradictorio. Llegado ese momento se impone una resolución de la misma que se presenta bajo la forma de un enfrentamiento con otro espacio de acumulación. Poco importa que en ese otro espacio aún no hayan madurado las condiciones. El enfrentamiento no puede evitarse, pues basta que uno de los dos espacios no tenga otra alternativa más que buscar la solución en un espacio político en el cuál no establece las reglas del juego. Es decir, el proceso de centralización y concentración reduce el número pero incrementa el tamaño de los capitales individuales. Los que quedan poseen la capacidad de abastecer al mercado de todo el espacio de acumulación y de manera creciente a otros mercados. Cuando la tensión entre las capacidades productiva y de consumo se hace intolerable, el conflicto pasa a desarrollarse en el nivel político. Las decisiones individuales de los capitales que en el plano meramente económico traspasaron el marco político, estableciendo filiales o sucursales en otros ámbitos políticos (estados, países, etc.), anticipan la batalla final en la prosecución de una integración más plena aunque nunca definitiva de los espacios. Siempre persisten capitales individuales retrasados en el desarrollo de las fuerzas productivas, aunque escudados en el caparazón político que posibilitó alguna vez su emergencia.

En este esquema, las finanzas detentan el papel principal. El capitalismo se desarrolló a partir de un núcleo que va incorporando otras regiones con relaciones sociales de producción previas y con un menor desarrollo de las fuerzas productivas. En ese proceso, las necesidades de capital para ser volcados a la producción fueron cada vez mayores, con lo cuál aquél que lograra absorber el excedente del último término de la ecuación elemental de la producción capitalista, D-M-D' (dinero-mercancía-dinero incrementado), detentaría la capacidad de liderar el proceso de incorporación de nuevos espacios y mercados. La banca estuvo en posición de transformarse en ese sujeto, ya que en virtud de la masa de metálico que manejaba, bastaba con reorientar el apetito voraz de capital para el consumo conspicuo de la aristocracia hacia las necesidades de inversión de la burguesía en ascenso. Las formas jurídicas (la separación entre propiedad y gestión, el accionariado y el directorio) detentadas por el sector fueron extendiéndose hacia el resto de las ramas productivas, al tiempo que muchos capitales individuales de éstas se incorporaban al

sector de finanzas por la comunidad de intereses en los proyectos de envergadura.

El espacio de acumulación norteamericano constituye el ejemplo por excelencia de este desarrollo. Desde las 13 colonias iniciales, el crecimiento del espacio a partir de la independencia se desarrolló principalmente a lo largo de todo el siglo XIX en forma paulatina. Esto implicó cierto retraso en alcanzar el punto de saturación en el equilibrio mencionado más arriba: las posibilidades de explotación del espacio aún permanecían a la zaga de la velocidad de ocupación de vastos territorios. Pero la combinación entre el momento de incorporación y las características físicas de cada estado significó una diferencia relativa que se demostraría fundamental⁹. De todas maneras, la forma política del proceso de acumulación, el federalismo, determinó enconadas resistencias de los estados frente a las fracciones más avezadas del capital que propugnaban por levantar las barreras que reducían la eficacia de la acumulación¹⁰. No obstante ello, detrás del telón se desarrollaba un desborde que tarde o temprano quebraría la resistencia¹¹. Ese momento finalmente cristalizó en 1913 con la creación de la Reserva Federal¹².

⁹ La diferencia temporal en la incorporación a la Unión de la mayoría de los estados determinó una desventaja insalvable para ello, con la excepción de California en 1850 y Texas en 1845, que por ciertas cualidades particulares – riqueza minera y acceso al Pacífico para el primero y petrolera para el segundo – pudieron acelerar su crecimiento.

¹⁰ El Segundo Banco Nacional tuvo una corta existencia, 1816 a 1836. Al igual que el Primer Banco Nacional (1791-1811) su estatuto no fue renovado por la resistencia de los estados a centralizar las reservas del gobierno federal. El presidente Andrew Jackson en 1834 emprendió la llamada “guerra bancaria”, al descapitalizar al banco nacional en favor de bancos de los estados.

¹¹ La supremacía de las primeras colonias y, dentro de ellas, de ciertos centros financieros –luego de un período en que Filadelfia, New York, Boston, etc. disputaban ferrozmente las transacciones comerciales y financieras– determinó la organización de un sistema de reservas interbancarias con epicentro en la ciudad de New York, que actuaba como prestamista de última instancia. Es significativo que durante las crisis –cuando el pánico hacía que todos acudiesen al mismo tiempo a retirar sus fondos depositados– las primeras regiones que se desmonetizaban eran el oeste y sureste del país.

¹² El sistema de la Reserva Federal surgió como consecuencia del pánico de 1907. El congreso estableció la ley de Reserva Federal según el cuál el país se dividía en 12 regiones, cada una con un Banco de la Reserva Federal – conducida por un presidente y cuyos accionistas son todas las entidades financieras incluidas en el sistema. La institución es conducida por una Junta de Gobernadores (siete miembros designados por el presidente con acuerdo del senado) y el Comité Federal de Mercado Abierto (la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de New York y cuatro presidentes de otros Bancos

Paralelamente a este proceso, las formas dinerarias se complejizan en su forma pero se simplifican en la velocidad de su realización (liquidez): el metal sólo permanece como reserva y expresión de valor con mayor realismo por su carácter tangible. El divorcio entre producción y circulación devino en un desorden general de las finanzas y su necesaria corrección posterior a través de la crisis del '30. La regulación de la economía no disipó los problemas, sino que los estabilizó: las correcciones podrían ser suavizadas y pronosticadas en relación con un ciclo general, aunque la forma, el momento y el lugar concreto de su advenimiento quedaría en poder de la "*mano invisible del mercado*". El esquema concertado de regulación, afirmado en Bretton Woods, se mostró eficaz en la fase ascendente posterior a una ingente destrucción de fuerzas productivas, como la que significó la Segunda Guerra Mundial. El agotamiento del impulso y el desgaste por el enfrentamiento político con otro espacio de acumulación con un grado de centralización del capital aún mayor, como lo era la Unión Soviética¹³, encontró el desencadenante en convulsiones propias de una rama estratégica para el conjunto de la economía mundial: la energía. Las denominadas crisis del petróleo de 1973 y 1979¹⁴, al afectar el principal insumo en la generación de energía, cristalizó los desajustes de la economía soterrados por los mecanismos de estabilización. La solución misma presupuso una transformación de esos mismos mecanismos, que fueron resignificados en función de permitir mayor fluidez. La misma debió contar con una forma política agresiva para desarrollarse: Reagan y la facción neconservadora. El punto culminante de esta iniciativa política lo constituyó el llamado "*Consenso de Washington*", que dotó a las formas de gestión del capital que venían desarrollándose de un impulso mayor. La llamada "*Revolución de los gerentes*", que alcanzaría su cenit con la conformación de junta ejecutiva, directorio y accionariado, abrazaba las formas desarrolladas en el sector de las finanzas. Como resultado de ello, las bolsas de valores pasaron a ser el núcleo donde se efectivizaba el reparto del valor apropiado entre los distintos participantes. De la negociación en su seno de instrumentos financieros extremadamente diversificados van obtener su parte principal los propieta-

de la Reserva Federal rotativos). Su creación no hizo más que confirmar la supremacía de New York como centro financiero del país.

¹³ La naturaleza del régimen soviético no es abordada en este artículo. Aquí sólo se menciona en función de la competencia de los bloques en el aspecto productivo, sin abordar la esfera circulatoria ni la forma en que se distribuía el valor social producido.

¹⁴ En los *Análisis* N° 48 (6/04), 49 (7/04) y 51 (9/04) se aborda la cuestión energética.

rios y, en mayor medida, los gestores propietarios del capital. Aunque también van a protegerse los trabajadores y capas medias –con la gravosa intermediación financiera mediante– de los efectos de una inflación controlada pero permanente, producto de la emisión de bonos constituyente del mecanismo del déficit público que expande la masa monetaria¹⁵. Esa expansión del equivalente del valor de mercancías –que a su vez son producidas en menor tiempo socialmente necesario, producto del crecimiento de la brecha entre el componente del capital constante y el variable– conforma el sustrato técnico que brinda la posibilidad de reproducción a fracciones de la burguesía sobrante para el capital social global. Sostener a una capa creciente de población rentista con hábitos de consumo con un claro predominio proporcional del tipo superfluo, que no es capaz políticamente (no técnicamente) de gestionar directamente el capital en el proceso de valorización –en cualquiera de sus fases del proceso productivo y circulatorio– presupone un incremento ad infinitum del capital ficticio.

Generar capital ficticio aparece, entonces, como la forma necesaria para prolongar en el tiempo el advenimiento de un "sinceramiento" entre la capacidad del mercado de absorber las mercancías y la realización del valor necesaria para que el capital continúe con el proceso de valorización. En una fase de la acumulación en la cuál la escala obliga a centralizar los recursos para optimizar una producción cada vez más localizada (en un proceso paradójicamente conocido como deslocalización), gestionar la masa de capital cada vez más global es el quid pro quo del ejercicio del poder.

¹⁵ "*Algunos inversionistas y analistas han empezado a cuestionar lo incuestionable: la calificación triple A que se otorga a los bonos del tesoro de EE.UU. La recién creada firma de clasificación de crédito Egan-Jones Ratings sostenía que los bonos de EE.UU. debían tener una clasificación de doble A, dos niveles por debajo de la calificación máxima de triple A y por debajo de la de países como Canadá, Reino Unido y Francia. Standard & Poor's estima que la deuda neta del gobierno estadounidense ascenderá a un 60% del PBI, muy por encima del nivel del 20% que caracteriza a un país con calificación de triple A*" (WSJ 7/12/04). Aquí vemos con claridad el rol de las calificadoras de riesgo, que apuntalan al sector. Éstas se alinean con las negociaciones al interior del Banco Internacional de Pagos (Banco de Bancos Centrales, creado en 1930) conocidas como Basilea II, que impulsan la uniformidad de los informes y la supervisión de las entidades por parte de calificadoras de riesgo. Este aval explícito es promovido por aquellos miembros con poder de decisión en el organismo: Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y EE.UU., verdadera minoría calificada sobre el total de 140 países miembros.

América Latina

Dos hechos de importancia marcaron la situación político-económica del mes de marzo. En primer lugar, la decisión de Brasil de no renovar el acuerdo con el FMI, lo que implica la aplicación de una política económica independiente de los dictámenes del "Fondo". Ahora bien, lo que pasaremos a analizar es si esa negativa de renovación significa romper efectivamente con la política económica que impuso el FMI a Brasil o si se trata simplemente de continuar con la misma política pero de manera independiente o autónoma.

Por otra parte, a la serie de acuerdos firmados por Venezuela que habíamos visto en el *Análisis de Coyun-*

tura pasado, se sumó en el mes anterior el acercamiento con España, cuyo jefe de gobierno visitó tierra venezolana, y otro apoyo (o espaldarazo) de Brasil en medio de la tensión que el país caribeño mantiene con EE.UU.

Por último, Bolivia continúa en la peor crisis de su historia, repitiendo el presidente Mesa sus intentos de renuncia para ganar adeptos partidarios y algo de apoyo popular. Lo cierto es que esa maniobra, que en un principio pareció darle algún resultado, se está transformando en un callejón sin salida y todo parece indicar que las diferentes fuerzas políticas y sociales se están preparando para futuras batallas.

Pelea por las ganancias

El motor chino parece enfriarse y aparecen nubarrones en el MERCOSUR

Con cierta sorpresa recibieron los exportadores del MERCOSUR la decisión de China de reducir en más del 50% el ritmo del crecimiento de su comercio exterior. En las proyecciones presentadas al congreso chino, el gobierno de ese país prevé una expansión del 15% en el valor de las importaciones y exportaciones (muy inferior al 35,7% registrado el año pasado). Éste será el índice más bajo de crecimiento en los últimos tres años.

Para Brasil, China es el tercer receptor de sus exportaciones, con lo cual el dato hizo prender señales de alerta en el gobierno de Lula. El país asiático llegó a amenazar la posición de Argentina como el segundo más importante destino de las exportaciones brasileñas (EE.UU. es el principal receptor con el 20,77%, Argentina recibe el 7,64% y luego está China con el 6,20%). Las ventas brasileñas a China se concentraron en soja y acero, y se está trabajando para entrar en el cerrado mercado de la carne (FDT 8/3).

Aparece nuevamente el temor de que este descenso en las importaciones chinas dé inicio a un nuevo capítulo en las difíciles negociaciones entre Argentina y Brasil, por la "invasión" de productos de uno y otro país en las diferentes ramas industriales. Con este marco de preocupación como fondo, se avanzó en la realización de un acuerdo de Libre Comercio (TLC) con India, país que ya había firmado un principio de acuerdo en marzo del año pasado. En marzo de 2004, India realizó un acuerdo de tarifas y licencias con el MERCOSUR, que contemplaba 600 productos agrícolas, químicos, automovilísticos y farmacéuticos. Actualmente, el acuerdo comercial concede re-

ducciones tarifarias a 450 productos, a los que se les facilita el libre acceso a los mercados (19/3 FDT).

Brasil afianza su política económica sin renovación con el FMI

La producción y las ventas industriales, que habían batido varios récords en 2004 –crecimiento del 5,2% del PBI (la mayor tasa de los últimos 10 años), crecimiento industrial del 8,3%, creación de 2 millones de empleos y exportaciones por encima de los US\$ 100.000 millones–, empezaron a declinar. Las estimaciones de aumento del PBI, hechas por los organismos oficiales, debieron ser revisadas para abajo. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas reveló que en enero se invirtió la tendencia de todo el año pasado. Hubo una caída en la actividad industrial del 0,5% desde comienzos de 2005. Las ventas reales cayeron 1,97%. En el Instituto de Política Económica Aplicada, un organismo oficial que depende de Hacienda, ya tuvieron que revisar los cálculos de este año respecto del crecimiento brasileño: será de 3,5% y no de 3,8%, tal como estaba pronosticado.

Brasil debe enfrentar varios problemas simultáneos. Por un lado, mantiene una voluminosa deuda externa e interna (US\$ 380.000 millones); por otro, muestra un atraso tecnológico en algunos sectores, y no sólo en relación con las primeras potencias mundiales, sino también con los propios sudamericanos. Según un informe de la Confederación Nacional de la Industria, el fin del ciclo expansivo de la economía brasileña "fue generado por la política económica recesiva...". Es decir, con una tasa de interés del 18,75%, las empresas tienden a evitar las inversiones productivas y colocan su dinero en la actividad especulativa. Tenemos en cuenta que el Banco Central brasileño aumentó la tasa de interés siete veces en 2004 –el mayor

índice en una década. Esto generó que la capacidad de producción esté colmada; por lo tanto, tal como están las actuales instalaciones fabriles, no se estaría en condiciones de abastecer un aumento de la demanda (C 10/3). Ésta es la razón por la cual el ministro de Hacienda Palocci insiste mantener altas las tasas de interés, para evitar un pico de consumo y disparar la inflación –tan temida para los economistas– que provocaría un desbarajuste en las cuentas fiscales. La apertura del mercado cambiario tiene como meta justamente evitar que se produzca ese pico inflacionario.

Justamente el mes pasado, el gobierno de Lula rompió la tradición de la política cambiaria brasileña, ya que abrió de manera total su mercado cambiario, al mejor estilo del ministro de economía Domingo Cavallo en Argentina. Esta medida permite la plena convertibilidad de la moneda brasileña en el futuro. Con esta apertura, dispuesta por el Banco Central bajo el comando de Henrique Meirelles –ex miembro del banco de inversiones J. P. Morgan– se busca facilitar la compra y la remesa de dólares al exterior, al abolir los límites de volumen y las restricciones legales que existían para personas y empresas: “*Cualquiera podrá desde ahora comprar y enviar dólares, o incluso otras monedas extranjeras, a sus países de destino, en la cantidad deseada, con el único requisito de informar la finalidad de esos envíos*” (C 6/3). Respaldadas sin fisuras por todo el gobierno de Lula, las medidas implican eliminar todo tipo de control sobre el flujo de capitales. El ex director del Banco Central brasileño, Emilio Garófalo, afirmó que “*las medidas permitirán más libertad para el flujo de capitales, eliminan las trabas que había para la entrada y salida de recursos del país*”. Y sentenció: “*El capital sólo entra donde puede salir fácilmente*” (C 6/3). Se espera que con esta apertura se produzca una entrada masiva de capitales (especulativos) que genere un alza del real (la moneda brasileña). En la misma sintonía, se espera que en el Congreso se trate la aprobación de una ley que le dé independencia al Banco Central (6/3 C).

Ahora bien, ante este panorama, causó cierto asombro la decisión del gobierno brasileño de no renovar el acuerdo firmado en 2002 con el FMI –que ya había sido prorrogado bajo el gobierno de Lula. Por dicho acuerdo, el gobierno brasileño se había comprometido a mantener un superávit primario del 4,25% del PBI –meta que fue cumplida gracias al recorte de los planes sociales e inversiones de infraestructura– y a tener un fondo de reserva que el FMI ofrecía para paliar crisis de “confianza” –elecciones en Brasil– o financieras –producto de crisis internacionales como la argentina del año 2001. Este fondo

había sido utilizado por Brasil en varias oportunidades, pero sólo llegó a superar un poco más del 50% del mismo (US\$ 26.000 millones sobre un total de 42.000). Por esos días el FMI elogió al gobierno brasileño por mantener la inflación controlada, afirmando que “*el desafío para el Banco Central es reducir más la inflación evitando un impacto en el crecimiento*” (25/3 FDT).

El flamante ministro de Planeamiento, Paulo Bernardo, fue uno de los primeros en afirmar que “*objetivamente el gobierno no tiene más necesidad de hacer el acuerdo*” (FDT 22/3). Pero la declaración oficial estuvo a cargo del ministro de hacienda Antonio Palocci: “*Es mejor para Brasil. Es mejor para el Fondo Monetario. Es mejor para nuestra economía que no tengamos la necesidad de realizar un nuevo acuerdo para el próximo período*” (FDT 28/3). Sin el FMI, Brasil decide de manera independiente su política económica, sus metas fiscales, tasas de interés, gasto público, inversión en infraestructura, etc: “*Nosotros estamos viendo un ciclo de crecimiento muy positivo, con control de inflación, un comportamiento fiscal bastante seguro para las cuentas presentes y futuras del país, y un desenvolvimiento de las cuentas externas extremadamente positivo*”, afirmó Palocci (FDT 28/3).

Pero más allá de este rompimiento, el gobierno brasileño, en su afán de retener a los inversores extranjeros, decidió mantener las metas que se habían acordado con el FMI, como ser un ahorro fiscal primario que llegue al 4,5% del PBI, manteniendo un bajo nivel del gasto público: “*No tener un acuerdo con el Fondo no significa que no tenemos una agenda de reformas microeconómicas y de medidas fiscales, de controles de inflación y de estímulo al comercio exterior como nosotros estamos trabajando*”, dijo el ministro (28/3 FDT).

Según Lula, su gobierno “*conquistó con sacrificio de todo el pueblo brasilero el derecho de andar con las propias piernas*”, y agregó: “*No podríamos, en tanto, jamás dejar de reconocer la gran importancia de ayuda del FMI en momentos muy difíciles de la historia de nuestro país. Mas era fundamental, para el crecimiento de Brasil, fortalecer nuestra economía, superando ese largo ciclo de dependencia financiera, para seguir nuestro destino, que es ser una grande y fuerte nación*” (FDT 28/3).

Para las fracciones del PT que se fueron del partido, creando el PSol-AL, representadas en la figura de Heloisa Helena, este rechazo a renovar con el fondo no debe ocultar que no se produce un cambio de la política económica: “*El gobierno no precisa de la vigilancia del FMI porque ya mostró la confianza de los parásitos sin patria del FMI*” (FDT 28/3). Para el senador Álvaro Dias –del partido Social Demócrata Brasileño–, “*ese anuncio es puro marketing*” (28/3, FDT).

Coyuntura política

Cumbre en Venezuela: apoyo clave a Chávez.

A fines del mes pasado se realizó en Venezuela una cumbre entre los presidentes de Colombia (Álvaro Uribe), Brasil (Luiz Inacio Lula da Silva), Venezuela (Hugo Chávez) y España (José Luis Rodríguez Zapatero). En el encuentro se realizaron varios acuerdos en materia energética, de comunicación, comercial y de defensa, así como el relanzamiento del plan "Hambre Cero" apoyado por Zapatero. Tanto PDVSA como Repsol firmaron acuerdos para que la empresa española aumente su presencia en el principal productor de petróleo latinoamericano y quinto del mundo. Por su parte, se siguió progresando en la integración de la infraestructura, con la continuación de las obras para los gasoductos y oleoductos que van desde Colombia a Venezuela, y de los gasoductos que unen a éste país con Brasil.

Pero la noticia más importante fue el acuerdo entre España y Venezuela, en el que el primero venderá equipos civiles y militares al segundo por valor de 1.300 millones de euros (unos US\$ 1.690 millones), a pesar de los temores de EE.UU. sobre la adquisición de armas por parte de Caracas (véase más abajo). El equipo militar implicado incluye cuatro barcos patrulleros costeros, cuatro corbetas, diez aviones de transporte C-295 y dos aviones de vigilancia marítima. Todos esto –así lo afirmaron tanto Caracas como Madrid– tiene como fines la defensa y el monitoreo, no el ataque. De hecho, ninguno de los materiales entregados posee armas de ataque. España también espera vender el buque petrolero Panamax a Venezuela, el quinto exportador de petróleo del mundo. (EUn 29/3).

Dijo Chávez: "Ratifico que las armas que estamos comprando a España a través de este convenio no son armas para la guerra, son equipos para la paz", y agregó que estos equipos serán para "seguir fortaleciendo la capacidad de custodia, de patrullaje, de vigilancia, de lucha contra tantos viejos y grandes vicios como el narcotráfico, la delincuencia internacional, el contrabando". Y señaló que con la firma de los acuerdos "han sido relanzadas" las relaciones entre Venezuela y España. "El compromiso es llevar a la práctica el Convenio de Cooperación integral, diría más, un alianza estratégica entre España y Venezuela, un alianza política, democrática, social, profunda, no sólo de gobierno [sino] de instituciones, de sectores privados, energéticos, cooperativos, científicos", subrayó (30/3 EUn).

Brasil, por su parte, descartó –en franca oposición a EE.UU.–, que exista un riesgo de carrera armamentista en América del Sur, a causa de las compras de fusiles por parte de Venezuela: "Brasil no tiene esa preocupación", dijo el asesor de Lula, Marco Aurelio Garcia, en relación a lo manifestado por Donald Rumsfeld a Lula y Kirchner en la visita a sus países. Y terminó afirmando: "No nos parece que sea una cuestión que constituya una amenaza", destacando que de todos modos "América del Sur dispone de mecanismos suficientemente fuertes para enfrentar cualquier problema resultante de algún desequilibrio militar en la región" (EUn 28/3).

Se van tensando las relaciones entre EE.UU. y la región

Luego de los diferentes acuerdos entre el jefe de gobierno español y Chávez, citados más arriba, y el nuevo impulso que están tomando los procesos de integración en materia de comunicaciones (TELESUR), energética (PETROSUR) y la tarea militar en conjunto que se está llevando en ciertas áreas –como el Amazonas– no resulta extraño que aumente la preocupación de EE.UU.

Ante las diferentes críticas a su gobierno, Chávez insistió en que si algo detiene el proceso abierto en Venezuela, por la injerencia de otros estados (en referencia a EE.UU.), los sindicalistas petroleros ya anunciaron que "no saldría una gota más de petróleo de Venezuela para Estados Unidos". Y ratificó que "nunca hemos dicho que vamos a dejar de abastecer a Estados Unidos con petróleo y lo repetimos, sólo que si el gobierno de ese país hace algo contra nuestra nación, entonces las cosas son distintas".

Por su parte, el subsecretario de Estado para América Latina, Roger Noriega, advirtió que su gobierno incrementaría "la concientización" entre los países vecinos de Venezuela acerca de los "actos de desestabilización" en los que está implicado Chávez (LJdM 10/3), para agregar que "si Estados Unidos y vecinos de Venezuela ignoran la afinidad cuestionable de Chávez por los principios democráticos, podríamos terminar con una Venezuela más pobre, menos libre y sin esperanzas que busca exportar a otros países su modelo fracasado", dijo. Por su parte, Condoleezza Rice afirmó que "si Hugo Chávez pretende gobernar democráticamente, debe permitir que emerja la oposición, que emerja una prensa libre, que no presione a la gente que se le está oponiendo" (LJdM 10/3). Para terminar esta serie de ataques, Noriega terminó afirmando que "sus esfuerzos [los de Chávez] por concentrar el poder dentro de su país, su relación sospechosa con fuerzas desestabilizadoras en la región y

sus planes de compra de armas son causas de gran preocupación”.

Ante esta avanzada norteamericana, varios fueron los que salieron a defender al gobierno de Chávez: el canciller de Chile, Ignacio Walker, pidió a Estados Unidos que “evite ideas simplistas” sobre Venezuela y advirtió que “no funciona” querer “aislar y castigar” al gobierno de Chávez. En conferencia en el Diálogo Interamericano, instituto con sede en la capital estadounidense, el canciller de Chile, Ignacio Walker, comentó: “Tengo la impresión que aquí en Washington hay tendencia a aislar y castigar a Venezuela, y esto no funciona”. Y agregó: “Le decimos a nuestros amigos estadounidenses que eviten opiniones simplistas. Encontramos a veces mucha retórica, opiniones simplistas que no tienen en cuenta la complejidad del proceso”. (LJdM 10/3).

Nuevamente Lula salió a apoyar de manera total al presidente venezolano, aprovechando la cumbre con Rodríguez Zapatero en Venezuela: “Nosotros no aceptamos difamaciones, insinuaciones contra compañeros. Venezuela tiene el derecho de ser un país soberano, de tomar sus decisiones. (...) Se te está acusando de cosas que aquel que convive contigo [por Chávez] sabe que no forman parte de tu pensamiento ni de tu comportamiento” (Eun 30/3).

Tras la intervención de Lula, Chávez criticó la política de Washington hacia Venezuela y vaticinó: “Van a seguir pasando cosas, la mano peluda que se mueve por estas

tierras va a seguir inventando, va a seguir provocando. (...) Por eso es tan importante la confianza entre nosotros, Venezuela ni apoya guerrillas, ni apoya narcotráfico, ni apoya movimiento contrario a gobierno alguno. (...) A mí me dicen golpista, pero soy enemigo de las corrientes golpistas-guerrillistas de América Latina” (Eun 30/3).

Por su parte, el gobierno norteamericano sigue acentuando sus planes de desestabilización del gobierno cubano de Fidel Castro. Está vez autorizó la entrega de U\$S 1 millón a la Universidad de Miami, para la investigación sobre el proceso de transición en Cuba, lo cual es parte de un proyecto general para generar y difundir información estadounidense, con el objetivo de establecer una “Cuba libre”: “El objetivo es incrementar el flujo de información precisa sobre democracia, derechos humanos y la iniciativa privada a, desde y dentro de Cuba”, afirma la agencia USAID en la justificación de su presupuesto para 2005. Al detallar su propuesta, la USAID busca en 2005 “construir solidaridad con activistas democráticos apoyando a prisioneros políticos, sus familias y activistas humanitarios, apoyando visitas de monitores internacionales de derechos humanos”, y dedica 5 millones para estos propósitos.

Noriega informó que hay también iniciativas para entregar a ONG cubanas computadoras portátiles, para difundir información que sirva para apurar la “transición” (LJdM 12/3).

Conflicto Social

Bolivia: La guerra del gas abrió una nueva batalla

La creciente polarización social que vive Bolivia –y que aún no termina de cerrarse– comenzó a hacerse frontal a partir de octubre de 2003, producto de la política económica llevada a cabo por Sánchez de Losada. En estos días la tensión cobra nuevos bríos a partir de la disputa por el recurso más preciado de Bolivia –y que fue el encendió la revuelta–: el gas.

Poniendo su renuncia a disposición del Legislativo, el presidente Carlos Mesa agregó incertidumbre al agitado clima del Altiplano. Raudamente descargó la culpa de esta decisión en el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales y en el Presidente de La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fedjuve) Abel Mamani. Ambos dirigentes mantuvieron una semana de bloqueos en puntos estratégicos de la circulación de mercancías, reclamando en forma conjunta que se eleven al 50% las regalías¹⁶ a los hidrocarburos y que esto

quede plasmado en la Nueva Ley. Por otro lado, la ciudad de El Alto insiste en romper inmediatamente el contrato con el franco-belga Grupo Suez, accionista máximo de la empresa Aguas del Ilumani, por el incumplimiento sistemático de sus obligaciones de proveer de agua potable y salubridad cloacal a los alteños (ver *Análisis N°56*).

La jugada de Mesa es, por un lado, acusar a los mecanismos de presión del MAS y el Fejudve alteño, por buscar soluciones inviables y causar la ingobernabilidad del país Andino. Pero, fundamentalmente, logró salir fortalecido con el rechazo que el Legislativo hizo de su dimisión. De esta instancia resolutoria obtuvo un “Pacto de Gobernabilidad” que jerarquiza el urgente tratamiento de La Agenda de Octubre, hoy ampliada por los reclamos del “Cabildo Abierto” de Santa Cruz (ver *Análisis N° 57*). El “Acuerdo ante la Nación” –pactado entre

fijarle. Bolivia aplicaría la regalía sobre precios internos regulados y externos según valor de referencia. Pero mientras que con el petróleo hay un valor de referencia mundial, con el Gas no sucede así y depende de un factor geopolítico. El 50% que pide la oposición en Bolivia no es mayor que en otros países y es menor que el de los grandes yacimientos.

¹⁶ La regalía es un porcentaje entregado por quien concesiona un yacimiento al dueño de un recurso. Distinto a los impuestos a las ventas, a las ganancias o exportaciones, la regalía se paga en “Boca de Pozo”. El debate es en torno a qué valor

las Cámaras y el Ejecutivo— establece el tratamiento urgente de la Ley de Hidrocarburos, la elección directa de Prefectos (gobernadores de Departamentos, a quienes hoy elige el primer mandatario), referéndum por las autonomías departamentales y Asamblea Constituyente.

No se nos escapa que el punto nodal de toda esta situación es la pelea por el reparto de la rentabilidad de los recursos más preciados de Bolivia: los hidrocarburos y —en especial— el Gas, que encuentra en esta geografía su segundo reservorio continental. *“En el fondo, Carlos Mesa chantajea para no cambiar nada. Si no cambia el modelo, Bolivia sigue siendo un país mendigo, se trata de resolver el problema de los recursos naturales. El pedido es para que el Parlamento apruebe el 50% de regalías”* (LTC 7/3). La propuesta del Ejecutivo, intentando mostrar seguridad jurídica, para reformar los contratos entreguistas del anterior presidente Sánchez de Lozada, apunta a mantener el 18% de regalías, compensándolas con un 32% de impuestos directos cobrables inmediatamente, sin forma de reducción interna pero con la posibilidad de que las empresas las reduzcan en sus casas matrices.

Contrarios a esta oferta se pronunciaron el MAS, la Confederación Obrera Boliviana (COB), el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) —que representa Felipe Quispe— y el Fedjuve de El Alto. Conformando “El Pacto Antioligárquico”, reclamaron como mejor beneficio, que garantice la seguridad social, el aumento de regalías al 50%, aduciendo la aceptada práctica de evasión impositiva de las transnacionales.

Mediando entre ambas posturas, se alza la “Tercera Vía”, que propone regalías del 18% y que el impuesto del 32% sea en “Boca de Pozo” y no sobre las ganancias luego de los descuentos y las compensaciones. Este último proyecto de Ley, presentado por la Cumbre Social Nacional, donde participa la Asamblea por los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y representantes del Legislativo fue la que finalmente votó el Congreso boliviano: *“Aquí no ha ganado la propuesta del gobierno, sino la intermedia que garantiza un ingreso para el país de US\$ 600 millones por año, frente a los 750 millones de nuestra fórmula y los 150 del gobierno”* (LN 17/3). Estas palabras efusivas del dirigente cocalero Evo Morales fueron acompañadas por el levantamiento momentáneo de los cortes de ruta.

La consternación del Presidente Mesa se expresó en sus presagios terribles para el futuro boliviano, condicionado —según él— por el malestar de los inversores internacionales: *“A partir de este momento el poder Ejecutivo deja de actuar en esta Ley. (...) Ya no puedo continuar negociando con un Congreso que se niega a aceptar la mínima racionalidad, (...) no voy a ir un minuto más a un Congreso a pedirle razón, a pedirle sentido común, (...) el Presidente no promulga esta Ley*

porque no estoy dispuesto a promulgar una Ley suicida” (LTC 16/3). Estas declaraciones fueron acompañadas de un Proyecto de Ley que adelanta las elecciones generales para Presidente, Vicepresidente, Diputados, Senadores y Constituyentes. Este proyecto también fue rechazado por el Congreso, por ser contrario a la legislación boliviana, que sólo contempla este llamado en la voz del Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El revés institucional fue acompañado del pronunciamiento del Fiscal General de la República, Pedro Gareca, quien determinó que los bloqueos no constituyen delito, negando con esto el pedido del Ejecutivo de actuar contra los bloqueadores.

En este confuso escenario, finalmente el Presidente decidió no rehuir a su responsabilidad y cumplir con su mandato, aunque es más que evidente lo delicado de su situación, que ya no cuenta ni con el precario acuerdo que había alcanzado del Congreso.

A todo esto se agrega la presión de las multinacionales que se pronunciaron a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), enviando al Senado un documento que cuestiona duramente los artículos sobre regalías e impuestos.

Luego de que la Comisión de Desarrollo de la Cámara Alta dé un paso más —con la aprobación en general— y que dé comienzo al tratamiento en particular, se agotan las instancias para la pronta aprobación de la Nueva Ley, que el Ejecutivo no podría vetar si es promulgada por el acuerdo de las dos Cámaras. Las petroleras están a la expectativa de lo que ocurra en el Senado y la CBH dijo que llevará al Estado ante un arbitraje internacional por incumplimiento de contratos.

Lo que nos queda claro de todo este marasmo es que la fuerza de oposición que encabeza el MAS, primera fuerza electoral (*ver Análisis N° 55*), quedó muy bien parada y esto es debido a que posee un rol transversal en este escenario, pues como partido actúa en el Congreso y como fuerza social aglutina a diferentes sectores. *“Nuestros principios ideológicos están firmes. (...) La preocupación del MAS no es solamente como Partido, sino elaborar un programa de gobierno coherente que satisfaga a todos los sectores sociales”* (LTC 18/3). Además de esto, el dirigente cocalero declaró que espera del Senado el debate de tres vectores: subir las regalías al 50%, la decisión de recuperar los hidrocarburos, la refundación de YPF con presencia productiva de gas y petróleo.

Como decíamos, la Guerra del Gas que estalló en Bolivia en 2003 promete seguir, por lo menos, hasta que la instancia institucional legisle en función de las necesidades del conjunto de la población.

Argentina

El cierre de marzo prometió opacar la fiesta de la burguesía local que celebraba la salida del default con los acreedores privados. Un fondo denominado "buitre" logró mantener congelados 7.000 millones de dólares que habían ingresado al Bank of New York para ser canjeados por deuda nueva. El llamado de unidad de la Unión Industrial Argentina no fue correspondido por la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) que exigió al gobierno una política fiscal austera. En el medio, la amenaza de un despegue inflacionario (atizado por distintos grupos económicos) fue respondido desde la presidencia con un llamado al boicot nacional, que causó la neurosis de la burguesía más concentrada local y extranjera. Finalmente, en lo que a la cuestión salarial respecta, fue el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el que -

separado de Kirchner, y enfrentado a Moyano- criticó la ejecución de subas por decreto, subordinando el reparto de la riqueza (cada vez más desigual) al aumento de la productividad de las empresas.

En cuanto a la coyuntura política, durante marzo comenzaron a posicionarse las diferentes fuerzas actuantes de cara a las elecciones legislativas de octubre. Así, desde el gobierno se anunció la plebiscitación del mandato de Kirchner, lo que provocó la reacción de las otras fuerzas electorales, incluido el propio duhaldismo, pilar de sostén del gobierno de Kirchner.

A su vez, veremos cómo desde diferentes frentes no se está dispuesto a esperar dicho plebiscito para mostrar descontento con las políticas de gobierno llevadas adelante por Kirchner. En tal sentido, veremos en acción a la Iglesia, los medios masivos de prensa, y la Casa Blanca.

Pelea por las ganancias

El país serio: entre el embargo y la austeridad fiscal.

Un País Serio tituló la Unión Industrial Argentina (UIA) una solicitada en donde aprobaba la definitiva salida del default con los acreedores privados, llevada a cabo por el gobierno nacional. El mensaje respetaba la línea de todo el bloque del capital local más concentrado (es decir, no sólo de la fracción organizada en la UIA) que apoyó abiertamente al gobierno en la reestructuración de la deuda durante los tres años que duró la negociación con los acreedores, con el FMI y con el Grupo de los 7 (países más poderosos del planeta). En rigor, la acción del gobierno en esta materia fue expresión del interés de la *burguesía local coligada*, que necesariamente debía reducir el tamaño de la transferencia de la riqueza social producida en el país hacia los acreedores privados. Acreedores estos, más dispersos y débiles que los centros multilaterales de crédito (FMI, BM y BID), cuya deuda se siguió pagando al día. Por eso la operación del canje de los títulos de deuda "viejos" por "nuevos" supuso un recorte en el capital adeudado del 65%, una extensión en los plazos de pago, y una reducción en la tasa de interés. Era menester para la burguesía local cambiar las pautas estipuladas en los compromisos asumidos en la pasada década.

Pero aun habiendo aceptado las condiciones del canje más del 76% de los acreedores¹⁷, las acciones tendientes a trabar el funcionamiento del mismo continuaron a nivel internacional.

A dichos obstáculos se anticipó la Unión Industrial sosteniendo en su solicitada que "*La salida del default anunciada por el Presidente es un acontecimiento trascendente y de características únicas, que todavía no parecen haber sido adverti-*

das por algunos análisis ligeros [...]. No tiene precedentes inmediatos una actitud similar como país" (C 3/3). Son muy indicativas la impresión sobre las ventajas no *advertidas* por ciertos *análisis ligeros*, por un lado, y la reiterativa mención del *país* como sujeto del canje, por el otro. Es decir, el llamado a la *unidad* es insistente frente a un enemigo oculto detrás de algún fondo buitre, de un sector del FMI, del G-7 o de Washington.

De hecho, el Fondo y el Banco Mundial exigieron fuertemente, a lo largo del mes pasado, que se considere la posibilidad de integrar al canje a los bonistas que no ingresaron en él y que apuestan a cobrar mediante una ejecución judicial favorable.

Pero el acontecimiento realmente desequilibrante lo protagonizaron el fondo acreedor Elliot Associates y el juez norteamericano Thomas Griesa. Cerrando marzo, Griesa inmovilizó, a pedido de dicho fondo, 7.000 millones de dólares en bonos que habían ingresado en la cuenta de la Argentina en el Bank of New York, para ser cambiados por los nuevos títulos. El bloqueo de los bonos es el paso previo hacia su posible embargo. Por eso, la medida puso en cuestión toda posibilidad de realizar el canje global. Cuatro días después, el juez falló a favor de la Argentina desbloqueando los 7.000 millones pero manteniendo en suspenso la medida hasta tanta no se expida la Corte de Apelación que entiende en el tema. Textualmente, el juez dijo que "*ambas partes [el gobierno argentino y el fondo Elliot] presentaron legítimos reclamos que ameritan una opinión de la Corte de Apelaciones*" (C 30/3). De esta manera, quedó en evidencia la falta de una completa garantía internacional que haga viable el canje. El reclamo del fondo "buitre" es, para la justicia norteamericana, tan *legítimo* como el del gobierno argentino.

Por otro lado, ante la salida formal del default, se reinició la *negociación con el FMI* para darle forma a un

¹⁷ En rigor de verdad se trata de una adhesión del 76% del valor adeudado.

acuerdo que había quedado congelado poco menos de un año atrás. Vuelve así la disputa en torno a la imposición de las denominadas *reformas estructurales*, que incluyen libertad de movimiento al capital en general (mínima injerencia del Estado en materia de programas de inversiones, aumentos de tarifas y precios, y explotación de la fuerza de trabajo), privatización de una parte de la banca pública, aumento del superávit fiscal (mediante el recorte en el gasto público) y eliminación de los impuestos al cheque y a las retenciones cobradas a las exportaciones. En este sentido, desde un editorial del periódico británico *Financial Times* (una de las tribunas más importantes del capital financiero) se leyó: “*Ahora la economía argentina se está recuperando y necesita reformas estructurales y nuevas inversiones*” (C 8/3). Como veremos más adelante, nuevamente el FMI y el BM coincidirán en exigir al gobierno el establecimiento de *reglas claras*, muletilla que oculta determinadas reglas jurídicas que orientarían la economía del país según las *reformas estructurales* recientemente comentadas.

Finalmente, a nivel interno, la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA) –que reúne a las empresas internacionales y locales más grandes que operan en el país– también marcó el terreno al gobierno en cuanto a las políticas económicas que se deben aplicar en lo inmediato. Aunque habiendo apoyado la operación del canje de deuda, la AEA no esperó para exigir “*políticas austeras que generen un superávit fiscal significativo*”. En su comunicado la entidad se explayó: “*esto sólo será posible [...] constituyéndonos en guardianes permanentes de la sana conducta fiscal del Estado*” (C 3/3). Pasado lo “peor” del conflicto social vivido en torno al 19 y 20 de diciembre de 2001, vuelve a escucharse la demanda, hasta el momento ensordinada, de austeridad fiscal que significa reducción del gasto público en materia de asistencia social, reducción de la fuerza laboral pública (y de su respectivo salario), abandono de la gestión pública en la prestación de servicios y reducción impositiva a las empresas. Pero como el conflicto social no puede abolirse por decreto, las presiones por aumentos de salarios y un desmán gubernamental, pusieron en cuestión la aparente paz que habilitaría la aplicación de políticas austeras en el gasto.

La batalla por los precios: la política del boicot.

Durante los dos primeros meses de 2005 el aumento de los precios internos llegó al 2,5%; para marzo se estima que el alza será de alrededor del 1% (C 21/3). Así, el aumento salarial no remunerativo de 100 pesos que el gobierno otorgó en enero a una fracción de los trabajadores (“en blanco”, públicos y privados) quedó prácticamente neutralizado por la inflación: si como afirma el INDEC la suba salarial promedio fue del 3,67% en lo que va del año (C 8/3), y el alza en los precios sería en el primer trimestre (tomando los datos consignados más

arriba) del 3,5%, la ecuación fácilmente visible da como resultado un número muy cercano a cero (0,1%).

De esta manera, la brusca disminución en la participación del ingreso por parte de los trabajadores, que supuso la devaluación a partir de 2002, lejos de revertirse se consolida o tiende a profundizarse.

Al mismo tiempo debemos aclarar que, si bien el índice de desocupación ha retrocedido mínimamente (lo que daría margen a una demanda por aumento salarial) la proporción de trabajadores “en negro” –es decir sin ningún tipo de protección legal, siguió creciendo hasta llegar al 48,9% de la fuerza de trabajo total, esto es 11,3 millones de personas (LN 19/3). Sumemos al análisis otra variable básica: van 26 meses consecutivos de crecimiento económico, que en enero de 2005 se expresó en una suba de más del 9% en relación con el mismo mes del año anterior (C 24/3).

Con todo esto, las huelgas y movilizaciones protagonizadas por distintos sectores de la clase obrera en los últimos meses (telefónicos, docentes, trabajadores del transporte, camioneros, etc.) pusieron sobre el tapete la necesidad de rediseñar el esquema de distribución del ingreso nacional. La canalización del conflicto ensayada por la UIA, la CGT y el gobierno, como veremos más adelante, no ha prosperado en el sentido de la materialización de un acuerdo mínimo entre las partes.

En este alarmante contexto laboral y social, cualquier presión hacia el alza de los precios de los bienes de consumo básico y de las tarifas de los servicios públicos contribuye tanto con la conflictividad social (en un contexto latinoamericano para nada apacible) como con la liquidación de un sector de la pequeña y mediana burguesía que depende del mercado interno.

Boicot nacional o reglas claras

Entrado el mes de marzo, varias ramas de la industria (alimenticia, frigoríficos, petroleras, siderurgia) aplicaron un aumento en el precio de venta de sus productos. Ante una perspectiva de suba generalizada en toda la línea de los precios internos, el gobierno salió al cruce intentando frenar la tendencia inflacionaria. En algunos casos, negoció los congelamientos con los empresarios. Así se dispuso con las alimenticias y los ganaderos (pollos, carnes, lácteos y harinas) que, cabe subrayar, exigieron a cambio una disminución impositiva a su favor. Pero en el más sonado caso de las petroleras Shell y Esso el gobierno echó mano de herramientas para nada confortables desde la perspectiva del capital más concentrado.

El día miércoles 9 la petrolera Shell aumentó sus combustibles entre un 2,6% y un 4,2%. Acto seguido, el propio presidente, Néstor Kirchner, denunció la medida públicamente y advirtió que el gobierno “*no se va a quedar de brazos cruzados. Así como hicimos con Shell diremos los nombres*” de quienes aumenten “*de forma abusiva los precios*” (C 10/3). Un día después Kirchner llamó abiertamente a un boicot nacional contra Shell: “*A Shell no le tenemos*

que comprar nada, ni una lata de aceite [...] No hay nada mejor que entre comillas este **boicot nacional** que le está haciendo el pueblo a quien se está abusando del pueblo” (C 11/3). En respuesta al golpe, Esso y la uruguaya Sol se sumaron a la aplicación de incrementos en los precios de las naftas y del gas.

Rápido de reflejos, el recientemente electo presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dispuso el retroceso del aumento y evitó dar un traspie en la relación con el afín gobierno argentino. Mientras tanto, y no menos veloz, el ministro de Planificación, Julio de Vido, agitaba la posibilidad de aplicar sanciones a las petroleras Shell y Esso: “Los aumentos son absolutamente injustificados [...]. Estamos analizando las medidas necesarias a los efectos de generar las sanciones que requieren actitudes de esta naturaleza” (C 13/3). A esta amenaza se sumaron otras que iban desde el posible aumento de las retenciones a las exportaciones o, aún más grave, la imposición del control de precios.

Pero lo cierto es que el llamado al boicot por parte del presidente Kirchner contra una empresa que decide ajustar hacia arriba el precio final de sus productos –y que de manera muy significativa provocó un derrumbe en las ventas de Shell del orden del 60% (LN 14/3)– operó en la disputa sostenida con las privatizadas que junto al FMI, a los gobiernos del G-7 y al BM vienen presionando a favor de una suba en las tarifas de los servicios. Si bien tanto Shell como Esso no controlan a nivel local los recursos naturales (sólo se encargan de las fases de refinación y venta, mas no de las de exploración y extracción del petróleo), lo que los ubica en una situación de debilidad frente a Repsol o Petrobrás, o frente a las compañías que controlan el agua, la electricidad, etc., el lanzamiento del boicot como “política de Estado” desde la presidencia apuntó hacia “algunos sectores monopólicos que nos quieren imponer condiciones”. En el mismo discurso, Kirchner sentó de manera categórica la respuesta a los argumentos críticos del BM, del FMI y de las entidades locales del capital más concentrado: ambiguamente llamó a combatir la “rentabilidad desmedida” (C 10/3).

Unos días antes el representante en Argentina del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, había afirmado: “para solucionar el problema de servicios públicos hay varios temas. Uno es el tema tarifas, pero no es el único. El marco regulatorio también es importante para la inversión a mediano y largo plazo [...]. Hay que compatibilizar la **rentabilidad** que debe tener una empresa como incentivo para invertir con la dimensión social” (C 7/3). Más tarde, el jefe del FMI, Rodrigo Rato, exigió que el país tenga “reglas de inversión, tanto nacional como extranjera, claras y respetuosas del funcionamiento de la iniciativa privada” (C 17/3). El mismo día, el economista jefe del BM, Guillermo Perry, concluyó que en la Argentina “es importante sustituir esas reglas que faltan” (que estaban amarradas a la convertibilidad).

A nivel interno sonaron las voces de La Nación y de la ya citada AEA. La primera firmó, en un editorial respecto del llamado al boicot, que “El gesto del presidente de la Nación pareció innecesario e inoportuno, en momentos en que la Argentina busca recuperar la confianza de potenciales inversores” (LN 11/3). Desde la AEA en la misma línea de los centros financieros internacionales reclamaron que “ahora el énfasis [en materia de políticas económicas] debe ser trabajar para generar un clima a favor de las inversiones”. Para esto es necesario que “haya más competencia en el mercado. La competencia es además fundamental para combatir la inflación” (C 17/3).

Ordenando un poco la seguidilla de posicionamientos verbales, saltan a la vista dos cosas clave. Por un lado, toda la línea del capital más concentrado a nivel local y el estrictamente foráneo con negocios en el país, que tomó posición pública frente al menor intento de control de precios (vía boicot, vía aumento de retenciones, vía sanciones a empresas o ramas), reclamó en coincidencia con los centros financieros internacionales la aplicación de **reglas claras**. Es decir, reglas favorables a la acumulación del capital con la menor injerencia posible por parte del Estado, garantía de alta rentabilidad (a decir del BM). En segundo lugar, y estrechamente vinculado a esto último, la AEA intervino a favor de lo que ellos llaman **libre competencia**, que no es otra cosa que libertad de movimiento a los monopolios en el mercado nacional, en materia de inversiones, ajustes de precios y explotación de la fuerza de trabajo.

A favor del **boicot** se posicionó sólo una fracción del movimiento piquetero (vinculado a la fracción kirchnerista del gobierno) y la pequeña y mediana burguesía local nucleada en CAME.

Sentado el antecedente, habrá que observar el desarrollo de la lucha no sólo en un “año electoral” como el 2005, sino luego, dado el carácter plebiscitario que Kirchner asignó a los próximos comicios.

La batalla por los salarios: el “antipopulismo” y antiestatismo de Lavagna.

La contracara obligada de la disputa por el aumento de precios suele ser la batalla por el salario. Dijimos más arriba que la UIA y la CGT habían llegado a un callejón sin salida en su intento por canalizar el conflicto social. De hecho, en febrero habían difundido un documento conjunto de cinco puntos que fundamentalmente incluía la discusión por la recuperación del salario real de los trabajadores, quedando empantanada, un mes después, la iniciativa.

A este espacio de negociación de la UIA y la CGT, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, dirigió su crítica pública: “Hay acuerdos de cúpula que no compartimos”, dijo (C 25/3). Pero lo que Lavagna fundamentalmente deploró fue todo proyecto de aumento salarial que “corra” detrás de la suba de precios de los bienes de consumo interno. Ciertamente, y como resultado de las re-

laciones de fuerza existentes entre las clases sociales a nivel nacional, la ejecución de aumentos por decreto se traduce en una espiral inflacionaria. Básicamente, el empresario traslada a sus productos el aumento en el costo de la mano de obra. Pero para evitar un descalabro inflacionario que avive al conflicto social (no cancelado por la fuerza de las armas luego de diciembre de 2001), los empresarios insisten en propagandizar que la condición necesaria del reparto de la riqueza es el aumento previo de la productividad. Palabra mágica que debe explicar todo.

Lavagna hizo suyo el argumento clásico del capital, aplicable a toda instancia de lucha: primero la rentabilidad o la productividad, luego las inversiones o los aumentos de salario. Así afirmó que *los aumentos de salarios "deben tener en cuenta la productividad [...] Los salarios tienen que actualizarse pero para eso es necesario que haya inversión y generación de empleo"* (C 24/3). Sin detenerse, el ministro avanzó en la exposición: *"Los sectores populistas dicen que, ahora que terminó el canje de deuda, tenemos que empezar con la redistribución de ingresos y otorgar préstamo a gran escala. Todos sabemos cuál es el resultado de esas políticas: hiperinflación"* (C 25/3). Al "antipopulismo" de Lavagna respondió inmediatamente el dirigente de la CGT, Hugo Moyano: *"los salarios no son los que producen inflación. Hay sectores y actividades que tienen un atraso del 30 por ciento en los sueldos"* (C 24/3). Tan solo un día después, el mismo Eduardo

Duhalde salió a respaldar públicamente al ministro de Economía, repitiendo el argumento que cancela la posibilidad de redistribución directa de la riqueza: *"No puede repartirse lo que no se produce; hay que repartir la riqueza que se va produciendo y es un proceso de relojería en el que el Gobierno tiene la intención de ir mejorando el ingreso de los trabajadores"* (LN 26/3).

En ese diálogo cruzado concluyó marzo en lo que a ajuste salarial respecta. Pero cerrando el mes, Lavagna se expidió en una línea opositora a los dichos del propio presidente Kirchner o del ministro de Planificación, De Vido, en materia de privatizaciones. Si en febrero De Vido había vindicado la estatización del servicio del correo, tanto por la expansión del mismo, como por las ganancias que reportaba al Estado (Ver *Análisis de Coyuntura* N° 57 (marzo 2005) p. 16.), Lavagna expuso ante el Financial Times que *"Algunos utilizan el ejemplo del Correo Argentino para promover la idea de un papel mayor del Estado. Yo no comparto esa idea. Si una compañía se va, mi posición sería reprivatizarla"* (LN 25/3).

La conclusión más veloz, pero no por eso menos profunda, la editó ese medio británico, días antes de la entrevista a Lavagna, cuando firmó en su columna editorial: *"Ahora la economía argentina se está recuperando y necesita reformas estructurales y nuevas inversiones. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, parece entender esto. Pero el presidente Néstor Kirchner no"* (C 8/3).

Coyuntura Política

Preparando el terreno electoral

En el plano estrictamente político, varios son los frentes abiertos en los que las diferentes fuerzas intentan aglutinar a sus tropas. La forma de hacerlo es presentando la posición particular como general y contraria a una acción particular de una fuerza contraria. Todo este accionar, se encuentra orientado, al menos en el mediano plazo, a preparar el terreno para las elecciones legislativas a realizarse en octubre del corriente año. Veamos esto en su desarrollo en nuestro país durante el mes de marzo.

Como dijimos, las elecciones de octubre próximo tienden a cobrar cada vez mayor relevancia. Varias son las cosas que están en juego. Por un lado, de parte del "orden institucional" en su conjunto, comprobar si los enormes esfuerzos por encarrilar el descontento social hacia el camino electoral darán algún fruto, algo que como vimos el mes pasado en Catamarca –donde la abstención creció 12 puntos respecto de la elección anterior, llegando al 55% (véase *Análisis...* N° 57)- no parece ser tan sencillo. Por otro lado, la necesidad de luchar contra la apatía electoral, por el momento parece estar ganándola un sector del gobierno nacional, el encabezado por el propio presidente Néstor Kirchner. Al menos eso dicen las encuestas de opinión, que durante el mes de marzo le dieron el mayor impulso a la confianza en el gobierno, con un crecimiento del 17% res-

pecto al mes anterior, alcanzando así al 75% de la población (LN 30/3).

Ante este panorama, el propio Kirchner no dudó en anticipar que en las elecciones de octubre plebiscitará su mandato, es decir, nacionalizará las elecciones, llamando a la población a votar a los candidatos que él apoye, según se esté de acuerdo o no con lo hecho hasta el momento por su gobierno: *"En octubre se juega un modelo de gobernabilidad –dijo Kirchner-. En todas las elecciones de este tipo se plebiscitan las gestiones."* (LN 10/3).

Ante esta situación, el ataque a la fuerza que el kirchnerismo intenta conducir llegó desde diferentes lados, inclusive desde el duhaldismo, es decir, desde dentro de la propia alianza que sostiene al gobierno. Recorramos estos frentes.

En el PJ bonaerense, los hechos siguieron en la misma línea de los que venimos describiendo en nuestro últimos *Análisis...* . La ruptura principal está dada entre quienes siguen fieles al caudillo provincial y ex presidente nacional Eduardo Duhalde, aglutinados en la corriente Lealtad, con Hilda González de Duhalde como principal figura por un lado, y quienes se aglutinan tras el devenido kirchnerista y actual gobernador de la provincia, Felipe Solá, agrupados en el Frente para la Victoria Peronista. Esta división llevó, a comienzos de marzo, a la ruptura del bloque justicialista en la Legislatura bonaerense.

Inmediatamente después de este hecho, las miradas quedaron puestas en el armado de las listas de candidatos para octubre. En este sentido, desde el Frente para la Victoria, se plantea que *“no están dadas las condiciones para realizar elecciones internas transparentes, por el amplio control de que del aparto del partido tienen los sectores duhaldistas”*. Solá busca evitar el enfrentamiento en internas, para lo que propuso ir directo a octubre con dos listas peronistas, a sabiendas de que su mayor apoyo lo conseguirá por fuera de las filas justicialistas (LN 28/3).

Ante esto, la respuesta de Duhalde no se hizo esperar, pidiéndole a Solá que compita en las elecciones por fuera del PJ (LN 29/3).

Sin embargo, esta situación no es única, sino que tiende a repetirse en cada una de las provincias, donde sectores alineados a nivel nacional con el duhaldismo disputarán en los próximos meses el armado de listas con los grupos más cercanos al kirchnerismo.

Inclusive por fuera del justicialismo, algo similar sucede con las provincias gobernadas por el radicalismo. Tal es el caso del recientemente electo gobernador de Santiago del Estero, el radical Gerardo Zamora, quien insistió con su cercanía a Kirchner en el acto de asunción: *“Transmítale al señor Presidente que vamos a acompañar las transformaciones del país”, dijo, dirigiéndose al ministro del Interior, Aníbal Fernández*. (LN 24/3).

Pero la competencia al interior de la alianza en el gobierno no es el único frente abierto. Esa fractura tiende a cerrarse, frente a los frentes electorales que, desde la centro derecha y la centro izquierda amagan con conformarse. En el caso de la primera, por un lado, el 15 de marzo sellaron un acuerdo electoral el presidente de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, y el gobernador de Neuquén, Jorge Sospich, lo que incluye la unificación de los respectivos bloques legislativos (LN 16/3). En el mismo espacio, intentando aglutinar las fuerzas de centro derecha en su candidatura a senador bonaerense, Ricardo López Murphy acordó el apoyo a su candidatura de parte de la histórica UCD (LN 25/3). Como vemos, esta fuerza aún no tiene conductor claro, sino que el espacio se encuentra en plena disputa.

En cuanto a la centro izquierda, se dio un nuevo paso en la conformación de un frente electoral entre los radicales alfonsinistas, con la diputada bonaerense Margarita Stolbizer como cara visible, los socialistas, el Partido Comunista, sectores de la CTA, y dirigentes de la Federación Agraria y de asociaciones nucleadas en la pequeña y mediana empresa (LN 26/3).

De cristianos y demonios

El conflicto que se desató en los meses de febrero y marzo de este año entre el gobierno nacional y la Iglesia en torno al ahora ex obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, está precedido por una relación escabrosa en los casi dos años que Kirchner lleva a cargo del ejecutivo nacional. El diario Página 12 reseñó algunos de esos hechos: *“Del ‘alineamiento automático’ con el Estado del*

Vaticano llevado adelante tanto por el gobierno de Menem (1989-1999) y el de Fernando de la Rúa (1999-2001) [...] se ha pasado con el actual gobierno de Kirchner, a una toma de distancia y a tener una política propia con respecto a las relaciones con el Vaticano.

“[...] El Presidente de la Nación no deseó participar en los eventos organizados por la jerarquía eclesiástica (Congreso Eucarístico Nacional de 2004, reuniones Episcopales, encuentros privados con obispos).

“[...] Se designó a un dirigente peronista de la ciudad de Buenos Aires –Guillermo Oliveri, sin vínculos con los grupos de poder en la estructura eclesiástica- como secretario de Culto en la Cancillería y encargado de las relaciones locales con el episcopado y los otros cultos. Recordemos que el Estado sostiene el culto católico y distribuye en el presupuesto nacional unos US\$ 4.000.000 para tal fin por año.

“[...] Se nombró como embajador ante el Vaticano a Carlos Custer, un sindicalista, rompiendo con la larga nómina de ‘ilustres católicos’ de familias notables o de empresarios – banqueros que ocupaban dicho cargo.

“[...] Se nombró como juezas de la Corte Suprema de Justicia a Carmen Argibay y Elena Highton, siendo éstas objeto de una intensa campaña pública de grupos y obispos católicos acusadas ambas de ‘favorecer la despenalización del aborto’, ‘atentar contra la vida’, una de ellas de ‘ser atea’, etc.

“[...] El no alineamiento del Estado argentino con las posturas del Estado del Vaticano y del Estado islámico de Irán en los encuentros de Naciones Unidas sobre temas de sexualidad y de mujer. Desde que Kirchner está en el gobierno se ha votado en esos foros el respeto de la homosexualidad y el reconocimiento de las relaciones de género como parte del análisis de una sociedad. No se insiste con los derechos del ‘no nato’ como sí lo hacían los gobiernos anteriores.

“[...] El conflicto público con obispos sobre políticas sociales y la condena a los militares que llevaron adelante el terrorismo de Estado.

“[...] El ahora ex obispo castrense Antonio Baseotto defendió públicamente a los jefes militares de la última dictadura e inició una campaña entre los diputados y senadores para que no se votase la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia debida aprobadas durante el gobierno de Alfonsín y que impedían la condena de militares que hubieran cometido delitos.

“[...] Los conflictos ligados a los temas de salud reproductiva y los métodos anticonceptivos que la Iglesia niega y a los que se opone sistemáticamente.” (Suplemento especial de Página 12, 26/03).

Estos son sólo algunos de los puntos enumerados por el matutino respecto a los frentes de conflicto entre el gobierno y la Iglesia, que nos permiten comprender cómo se llega a la situación de máxima tensión que se vivió durante el mes de marzo.

El mes anterior, monseñor Baseotto señaló públicamente que se debería *“colgar una piedra de molino al cuello y arrojar al mar”* al ministro de Salud, Gines González García a raíz de su propuesta para despenalizar el aborto. Ante esto, el 23 de febrero, el gobierno reclamó al

Vaticano la “renuncia” de Baseotto. La respuesta del Vaticano tardó casi un mes en llegar. El 16 de marzo, la Santa Sede le hizo saber al gobierno nacional que “no veía ninguna razón para remover al obispo” (LN 17/3).

Finalmente, y luego de testear la idea de denunciar el tratado firmado por el gobierno de facto de Aramburu en el año 1957 que creó el vicariato castrense, ascendido en 1992 a obispado por decreto de Carlos Menem, con rango y remuneración de subsecretario de Estado, Kirchner decidió remover al obispo Baseotto, impidiéndole así ejercer sus funciones, el día 18 de marzo.

Si bien es muy difícil conocer a simple vista las líneas internas que atraviesan a la Iglesia católica y su expresión en congregaciones y obispados, transcribimos algunas declaraciones ante los hechos descritos que sientan posición al respecto. Pero antes, debemos recordar que Baseotto, nombrado obispo por decreto de Duhalde, llegó de la mano del influyente Esteban Caselli, un hombre del menemismo, con llegada directa al Vaticano. En este sentido, se entiende el silencio de muchos obispos ante el primer enojo del gobierno. Sin embargo, cuando llegó la orden del Vaticano de defender a Baseotto, algunos obispos acataron la orden papal, haciendo declaraciones públicas. Así, la Confederación Episcopal presidida por monseñor Mirás, señaló en un comunicado: “*Deploramos que esta determinación apresurada y unilateral entorpezca, precisamente en estos días de Semana Santa, el habitual desarrollo del ministerio que la Iglesia encomienda al obispo castrense, quien tiene bajo su inmediato cuidado pastoral a una específica comunidad del pueblo de Dios, extendida por todo el país*” (LN 20/3).

El mismo día, el Vaticano expresó su posición a través del vocero del Papa, Joaquín Navarro Valls: “*Obviamente, si se impidiese ejercer el ministerio pastoral a un obispo nombrado legítimamente por la Santa Sede, según las normas de derecho canónico, y de los acuerdos vigentes, nos encontraríamos de frente a una violación de la libertad religiosa, además de los mencionados acuerdos*” (C 20/3).

La respuesta del gobierno la dio el canciller Rafael Bielsa, en duros términos: “*Puede cumplir con sus obligaciones pastorales, pero gratis, porque no es funcionario del Estado*” (C 21/3).

Al otro día, monseñor Mirás, presidente del Episcopado, denunció la existencia de “*una campaña contra los cristianos y los católicos*” (C 22/3).

Y pasada la Semana Santa, quien fustigó en duros términos al gobierno fue monseñor Gianquinta, preguntándose sobre Kirchner si “*¿son sólo sus demonios internos o hay demonios externos que lo azuzan?*” [...] y calificando de ‘torpeza como acto de gobierno’ la reacción presidencial.”

En el mismo artículo, se señala también una declaración de la única voz de la Iglesia nacional que hizo pública su postura en contra de Baseotto. Se trata del obispo de Humahuaca, monseñor Jesús Olmedo, quien criticó “*al polémico obispo castrense al asegurar que sus palabras contra el ministro de Salud fueron ‘muy desafortunadas. Eso nun-*

ca lo diría Cristo ni lo diría un cristiano’, agregó el religioso” (LN 28/3).

La SIP y un informe “precisamente incorrecto”.

Otro de los frentes que permanece hostil a las políticas del gobierno de Kirchner es el correspondiente a la relación con los medios de prensa masivos. Durante marzo, fuerte fue el ataque que desde diferentes organizaciones empresariales relacionadas con la prensa escrita debió soportar el gobierno. Ya a comienzos del mes, llegó al país una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para elaborar un informe sobre la situación de la prensa en la Argentina. Al otro día de su arribo al país, el presidente de la entidad, el empresario editor Alejandro Miró Quesada señalaba que “*el Gobierno nacional siente ‘desprecio por la actividad periodística’*” (LN 2/3).

Al día siguiente, la delegación de la SIP presentaba un adelanto de su informe, en el que señalaba que “*Los medios y los periodistas son blanco de un estilo de relación con funcionarios del Gobierno que, en la mayoría de los casos, se define como presiones que inciden en forma importante en la información que se transmite en público [...]. En el informe leído por Marroquín se destacó que la delegación de la SIP ‘comprobó que la asignación de publicidad oficial se aplica con un criterio que no es objetivo ni sigue pautas técnicas ni profesionales, planteándose situaciones desiguales, actos de discriminación que favorecen a determinados medios y castigan a otros, [...] que consisten en apoyar a los medios medianos y pequeños y evitar favorecer a los más grandes’*” (LN 3/3).

Al día siguiente, llegó la respuesta presidencial: “*La SIP se dedica a cuidar los intereses de los grandes medios [...]. Según el criterio de la SIP, hay que darles los fondos a los medios más grandes, porque la propaganda se debe distribuir según la capacidad de venta’, señaló Kirchner*” (LN 4/3).

Y al día siguiente, el Presidente avanzó con sus críticas, al enterarse que uno de los miembros de la delegación de la SIP, Danilo Arbilla, fue jefe de prensa de la última dictadura en Uruguay: “*No puede ser que vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa, más ellos, que para imponer sus ideas mataron a periodistas, los secuestraron, y hoy vienen a hablar en una forma absolutamente insostenible’, aseveró el Presidente*” (LN 5/3).

Inmediatamente, desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), institución empresarial que aglutina a las editoriales, se defendió el informe de la SIP, reclamando nuevamente por la distribución de la pauta oficial (LN 6/3).

El mismo día, una solicitada defendía el campo contrario. Se trata de la Red de Carreras de Periodismo y Comunicación Social de Argentina (REDCOM), quien tildó de “operación política” a la movida de la SIP, señalando entre otras cosas que los medios por los que la SIP habla, es decir, los grandes medios, no viven de la pauta oficial, la que sólo les representa el 2% de sus ingresos. Por otro lado, en dicha solicitada se denuncia lo

actuado por la SIP en la última dictadura en nuestro país, por avalar la desaparición de trabajadores de prensa, el cierre de medios de comunicación y la instauración del terrorismo de Estado (LN 6/3).

Asimismo, dos días después, otra solicitada, esta vez a nombre de la Coalición por una radiodifusión democrática, integrada por diversos sindicatos de trabajadores de medios de comunicación, así como por organismos de derechos humanos y diversas organizaciones sociales, denunciaba a la SIP por el control que los grandes medios tienen sobre la información, bajo el título “*Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Los intereses ocultos de la misión de la SIP*” (LN 8/3).

Finalmente, el 12 de marzo, la SIP presentó su informe en el que ubica al gobierno de Kirchner junto al de Castro (Cuba) y Chávez (Venezuela) en lo que a relación con la prensa se refiere. La afirmación sorprendió a los propios instigadores: tanto el director de La Nación, Bartolomé Mitre, como su par de El Día, Raúl Kraiselbur, coincidieron en que semejante afirmación resultaba incorrecta y desproporcionada (LN 13/3), aun cuando desde sus respectivos periódicos se atacó permanentemente la postura de Kirchner incentivando a la SIP a concluir en su informe lo que finalmente la entidad expresó. A tal punto la contradicción, que al día siguiente leemos en La Nación: “*El director de La Nación, doctor Bartolomé Mitre, agradeció en nombre de los miembros argentinos de la SIP por la oportunidad de la visita de la misión de la SIP a la Argentina y por su preciso, contundente y movilizador informe sobre las amenazas que afronta el periodismo del país*” (LN 15/3). En síntesis, y en palabras del propio Mitre, un informe preciso, con afirmaciones incorrectas y desproporcionadas.

Ya sobre el final de marzo, volvió a la carga ADEPA, con un comunicado en el que quedaba en claro que para dicha entidad, libertad de prensa significa libertad de empresa, es decir, libre mercado. La postura es simple: quien no puede sobrevivir económicamente, no puede opinar ni informar. Así lo señaló el presidente de

ADEPA, Gustavo Vittori, al afirmar: “*Si las empresas periodísticas no están consolidadas económicamente, la libertad de prensa se convierte en una entelequia*” (LN 01/4). En esto sí que no caben contradicciones discursivas.

Baratitos los radares...

El otro frente por el que el gobierno de Kirchner fue criticado durante el mes de marzo, refiere a su política de seguridad, sobre todo a lo permeables que resultan las fronteras de nuestro país.

El primero en criticar fue el propio gobierno de los EE.UU., quien “*expresó su preocupación por el incremento de la actividad de narcotraficantes colombianos a través de la Argentina*” (C 5/3).

Durante el mismo mes, el Ministro de Defensa, José Pampuro, recibió en su despacho al secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld. Las principales razones de la visita fueron las de “*destrabar la posibilidad de ejercicios militares conjuntos y el rol de EE.UU. en el plan de radarización argentino*” (C 22/3).

Esta situación chocó de frente con el planteo argentino de construir radares propios en el INVAP, proyecto anunciado por Kirchner el 1º de marzo.

La respuesta de EE.UU. no se hizo esperar. A la semana, la Casa Blanca emitió un informe en el que la Argentina figura como “país de riesgo” por su fronteras permeables en cuanto al tráfico de personas, junto a Irán y Afganistán, entre otros (LN 29/3).

La respuesta del gobierno nacional llegó a través del ministro del Interior, Anibal Fernández, quien señaló que el informe del gobierno de los EE.UU. hay que entenderlo como presión hacia la Argentina para que nuestro país compre tecnología estadounidense en el proceso de radarización, en vez de intentar producirla localmente. Así lo señaló Fernández: “*Me parece que hay una vocación de alguna venta de software que no estamos dispuestos a comprar. Así que: hasta la vista, baby*” (LN 31/3).

Conflicto social

Los principales acontecimientos registrados en el mes de febrero fueron: 28 jornadas huelgas parciales – incluye tres semanas de paro docente en Salta–, en donde destacamos el desarrollo de varias huelgas realizadas por los docentes del interior del país; 7 jornadas de marchas y actos; 6 jornadas de cortes de ruta, calles, autopistas, puentes; 5 jornadas de ocupación y/o toma de empresas privadas o edificios públicos.

Las organizaciones y agrupamientos que protagonizaron las jornadas fueron: trabajadores docentes (28); trabajadores aeronáuticos (5); Camioneros (4). Finalmente, trabajadores portuarios, nucleados en Fempinra; trabajadores de la carne; familiares de las víctimas de Cromagnon; Corriente Clasista Combativa; Asociación de Consumidores (ADECUA); Bloque Piquetero Nacional; trabajadores petroleros nucleados en el Sindicato de Pe-

troleros Privados de Neuquén y Río Negro; Barrios de Pie, FTV, Frente Barrial 19 de diciembre, MTD “Evita Vive”; MIJD; MTD Anibal Verón.

Entre las principales demandas y consignas observamos: reclamos o aumentos salariales (26); cambio en el encuadramiento gremial (4); rechazo a la privatización de empresas (3); renuncia y encarcelamiento de funcionario públicos (3) –destacamos la que incluye al jefe del gobierno de la CADBA, Anibal Ibarra–; aumento en el monto y/o cantidad de los planes sociales (2); mejores condiciones laborales (2); rechazo a los aumentos de precios (1); trabajo genuino (1); rechazo a despidos de trabajadores (1).